

Andrea Carolina Jaramillo Contreras

VIDAS EN TRANSICIÓN



La reincorporación colectiva
de exintegrantes de las FARC - EP



Vidas en transición

Para citar este libro:

<https://doi.org/10.51573/Andes.9789587988666.9789587988673.9789587988680>

Vidas en transición

La reincorporación colectiva de exintegrantes
de las FARC-EP

Andrea Carolina Jaramillo Contreras

Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política

Nombre: Jaramillo Contreras, Andrea Carolina, autora.

Título: Vidas en transición : la reincorporación colectiva de exintegrantes de las FARC-EP / Andrea Carolina Jaramillo Contreras.

Descripción: Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales, Ediciones Uniandes, 2025. | xxxiii, 225 páginas : ilustraciones ; 17 x 24 cm.

Identificadores: ISBN 9789587988666 (rústica) | 9789587988673 (e-book) | 9789587988680 (epub)

Materias: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia | Acuerdos de paz – Colombia | Reinserción – Colombia

Clasificación: CDD 303.66–dc23

SBUA

Primera edición: septiembre del 2025

© Andrea Carolina Jaramillo Contreras

© Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales

Ediciones Uniandes

Carrera 1.ª n.º 18A-12, bloque Tm

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 601 339 4949, ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

ediciones@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales

Carrera 1.ª n.º 18A-12, bloque G-GB, piso 6

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 601 339 4949, ext. 5567

<https://cienciassociales.uniandes.edu.co/ediciones/libros/>

publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

ISBN: 978-958-798-866-6

ISBN e-book: 978-958-798-867-3

ISBN epub: 978-958-798-868-0

doi: <https://doi.org/10.51573/Andes.9789587988666.9789587988673.9789587988680>

Corrección de estilo: Ana María Cobos

Diagramación interior: Nancy Cortés

Diseño de cubierta: Boga Visual

Imagen de cubierta: Andrea Carolina Jaramillo Contreras

Impresión:

Imageprinting Ltda.

Carrera 27 n.º 76-38

Teléfonos: 601 631 1350 - 601 631 1736

Bogotá, D. C., Colombia

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*

Este libro cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y fue sometido a evaluación de pares académicos.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia. Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 000194 del 16 de enero del 2025, Mineducación.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Lilian, una mujer exintegrante de las FARC-EP que militó por más quince años en este grupo guerrillero me permitió quedarme en su casa durante un mes. La primera noche que me quedé en su casa me dijo: “Duerma con la mosquitera que me acompañó en el monte, para que sientas un poco lo que significa vivir en la guerra”. Ella tenía razón, cuando dormía con este mosquitero, aún podía sentir y oler el monte.

Este libro está dedicado a todos los hijos y las hijas de los firmantes de paz que han nacido desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP.

Contenido

Lista de recursos gráficos · xi

Lista de acrónimos · xiii

Nota aclaratoria · xv

Agradecimientos · xvii

Introducción · xix

Contexto · xxiii

La investigación · xxv

Términos y definiciones · xxx

Estructura del libro · xxxii

1 Antecedentes del desarme, la desmovilización y la reintegración: el caso colombiano · 1

Trayectoria del DDR · 1

Generaciones del DDR · 4

Desafíos del DDR · 10

Antecedentes del DDR en Colombia · 12

Surgimiento y evolución de las FARC-EP · 17

El fin del conflicto y los retos en el proceso
de reincorporación · 23

Política nacional para la reincorporación social
y económica de los firmantes de paz · 30

**2 La construcción de significados en la
reincorporación · 37**

¿Por qué utilizar el término *reincorporación*? · 38

La colectividad en la reincorporación · 49
La paz en la reincorporación · 55
Las mujeres en la reincorporación · 62
3 Más allá de la corriente principal: dimensiones en la reincorporación colectiva · 71
Reincorporación política · 73
Dimensión económica · 85
Reincorporación social · 92
4 La vida cotidiana de la reincorporación colectiva: realidades en tandem · 107
¿Por qué es importante la paz cotidiana? · 107
En el camino a la reincorporación · 109
Desafíos para mantener el legado en la reincorporación colectiva · 114
La familia fariana · 119
Evocar el pasado en el presente · 123
Identidades propias en la colectividad: transición en disputa · 137
Conclusiones · 140
5 Mundos sociales, poder(es) y paz territorial en la reincorporación colectiva · 143
Aproximación a los mundos sociales en la reincorporación colectiva · 143
La formación de mundos sociales en la reincorporación colectiva · 145
Intersección de mundos sociales · 158
“El mundo local” en la creación de la paz territorial · 176
Conclusiones · 180
6 Conclusiones: la vara mágica está en las personas, no en las políticas · 181
Recapitulación · 181
Limitaciones internas y externas de la reincorporación colectiva · 189
Futuras investigaciones en materia de reincorporación al DDR · 193
Vivir con incertidumbre · 194
Referencias · 197

Lista de recursos gráficos

Figuras

- Figura 1.** Generaciones del DDR · 5
Figura 2. Trayectoria de los AETCR y NAR · 25
Figura 3. Estructura organizativa del proceso de reincorporación · 33
Figura 4. Organización interna de los AETCR y NAR · 113

Fotografías

- Fotografías 1 y 2.** *Baby boom* · 68
Fotografía 3. Póster que promueve el partido FARC · 117
Fotografías 4 y 5. Botas de caucho · 125
Fotografías 6 y 7. Mochilas · 127
Fotografía 8. Ropa y accesorios · 128
Fotografías 9 y 10. Símbolos y música · 129
Fotografía 11. Casa · 131
Fotografía 12. División del alimento por grupo familiar · 132
Fotografía 13. Cocina · 133
Fotografía 14. Símbolos de su pasado · 134
Fotografías 15 y 16. Bautismos y funerales · 135
Fotografías 17 y 18. Fútbol y pelea de gallos · 136

Mapa

- Mapa 1.** Ubicación de los AETCR y NAR • 29

Tablas

- Tabla 1.** Diferencia entre reintegración y reincorporación • 39
- Tabla 2.** Instituciones públicas y organizaciones en las que los firmantes de paz han trabajado • 161

Lista de acrónimos

AETCR	Antiguos espacios territoriales para la capacitación y reincorporación
ARN	Agencia para la Reincorporación y Normalización
CIDDR	Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración
CNMH	Centro Nacional de Memoria Histórica
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSIVI	Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final
DDR	Desarme, desmovilización y reintegración
ECOMUN	Economías Sociales del Común
ELN	Ejército de Liberación Nacional
ETCR	Espacios territoriales para la capacitación y reincorporación
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
M-19	Movimiento 19 de abril
NAR	Nuevas áreas de reincorporación
OACP	Oficina del Alto Comisionado para la Paz
ONG	Organizaciones no gubernamentales
UNDP	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ZVTN	Zonas veredales transitorias de normalización

Nota aclaratoria

ESTE LIBRO ES el producto de mi tesis de doctorado llevada a cabo en la Universidad de Marburgo en Alemania, la cual entregué en una versión en inglés a la biblioteca de esta institución en febrero del 2022. Esta investigación describe el pasado en el presente de los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que formaron parte del acuerdo de paz en el 2016 en Colombia. Detalla las voces de este grupo y sus prácticas colectivas de reincorporación teniendo en cuenta tres casos de estudio, que demuestran prácticas similares, pero con particularidades distintas. Bajo una investigación cualitativa con enfoque etnográfico profundizo en la dimensión individual, colectiva y relacional de este exgrupo guerrillero e identifico las prácticas de reincorporación colectiva tanto como una estrategia que contribuye a los discursos de reintegración como una dinámica que genera tensiones entre el pasado y el presente de sus exintegrantes y su relación con otros grupos sociales. El libro hace alusión a la importancia de la colectividad como una nueva perspectiva de construcción local de paz y de resistencia frente a patrones sociales, políticos y económicos que perpetúan en el tiempo e influyen en la construcción de una paz estable y duradera. Este libro demuestra cómo la construcción de paz no representa un *después* en el conflicto, sino una *conexión entre un pasado en conflicto y un presente en constante transformación*.

Agradecimientos

ESTA INVESTIGACIÓN CONTÓ con el valioso apoyo de muchas personas sin las cuales este libro no habría sido posible. En primer lugar, quiero agradecer a todos los firmantes de paz que se tomaron el tiempo de compartir conmigo sus vidas, miedos, nostalgias y esperanzas, sin esperar nada a cambio. Aprecio enormemente a todos aquellos que me permitieron dormir en sus casas y me hicieron sentir parte de su familia. Realmente no puedo describir lo mucho que aprendí de ellos y las lecciones de vida que me enseñaron. Así mismo, quiero agradecer a todos los profesionales de campo que me apoyaron con sus contactos, entrevistas y estuvieron siempre dispuestos a apoyarme durante mi estadía en los territorios.

En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a mi supervisora de doctorado, la profesora y doctora Anika Oettler, por permitirme explorar por mí misma el camino de mi investigación y por guiarme cuando me sentí perdida en este trayecto. Además, quiero agradecer a mi segundo supervisor, el profesor y doctor Ernst Halbmayer, por sus consejos durante mi investigación y por sus valiosos comentarios. Así mismo, al Centro de Estudios de Paz y Conflictos de Marburgo por permitirme participar en los coloquios, conferencias y debates; a los estudiantes del doctorado y a los miembros del personal que estuvieron siempre dispuestos a ayudarme. Especialmente, quiero agradecer a Eva Georg, Bettina Wallon y Jan Gerd Wilkens, quienes para ese entonces formaban parte del Instituto de Sociología.

Mi más sincero agradecimiento al Servicio Alemán de Intercambio Académico por la financiación de mis estudios; sin esta ayuda no habría podido estudiar en el extranjero y terminar mi doctorado. Además, a la Academia de Investigación de la Universidad de Marburgo, por financiar algunas conferencias a las que pude asistir y por contribuir a enriquecer este viaje con los diversos cursos ofrecidos para estudiantes de doctorado internacionales.

Agradezco todos los aportes y comentarios de numerosas personas que leyeron mis borradores y discutieron mis ideas conmigo. Gracias a Bart

Dikstra, Anne Goletz, Philipp Naucke, Eva Williams, Joana Amaral, Alina de Luna, Viviana García Pinzón, María Cárdenas, Enzo Nussio, Sandra Ríos y Johannes Langer. Además, quiero dar las gracias a Braulio Gómez por su constante apoyo en mi estadía en Alemania y a la Red Colombia Rhein-Main por permitirme cofundar esta iniciativa de colombianos que desde el exterior damos a conocer, entre otras cosas, el proceso de paz en Colombia.

Finalmente, agradezco profundamente a mi familia y amigos que me animaron a seguir trabajando en esta investigación, especialmente a mis hermanos, José y Marcela, que me apoyaron emocionalmente en esta etapa de mi vida; a mi primo, Sergio, que siempre me dio buenos consejos durante este camino de doctorado. A mis amigos de Colombia, gracias por estar siempre ahí cuando más los necesitaba, y a mis amigos de Marburgo, gracias por comentar mis documentos y compartir conmigo muchos momentos especiales de este trayecto en mi vida. Por último, pero no menos importante, gracias a mis padres, que siempre me mostraron la importancia de la sensibilidad social y el amor por mi país, y que desde la distancia siempre confiaron en mí y en mis potencialidades.

Introducción

NOS REUNIMOS TODOS en la casa de Carla, que trabajaba para las Naciones Unidas. Desde allí podíamos divisar las montañas del cerro de Paramillo ubicado en Antioquia, cerca de uno de los campamentos en los que se encontraban los firmantes de paz. Era precioso, la tranquilidad del entorno y el sonido de la brisa nos amenizaban la velada. Alrededor de una natilla, un postre tradicional de Navidad, hicimos un círculo en el suelo y empezamos a hablar de nuestra vida cotidiana. Allí estaban Tobías, Michael y Esther, tres firmantes de paz que tienen funciones de liderazgo en la comunidad. Siempre los vi compartiendo con otras personas y participando en las diferentes reuniones organizadas por el pueblo. Tobías y Michael nacieron en esta región (cerca del cerro de Paramillo) y decidieron involucrarse en el grupo guerrillero debido a los altos niveles de inseguridad de esta zona y la falta de oportunidades para los jóvenes. Esther, una mujer de unos cuarenta años, formó parte de la guerrilla durante más de dos décadas y tuvo un fuerte compromiso con la ideología de las FARC-EP.

También se encontraba Macías, miembro de la junta de acción comunal de la vereda Llano Grande. Siempre admiré su nobleza. Durante los años noventa, fue desplazado a la fuerza de su territorio y dos de sus familiares cercanos fueron asesinados por grupos paramilitares. También estaban Carol y Mayerly, dos estudiantes de la Universidad de Antioquia que se habían enamorado de esta región y de la comunidad de Llano Grande y decidieron quedarse en este pueblo más tiempo del que requería su investigación.

Pilar y Carla también acompañaban esta gran velada, dos miembros de las Naciones Unidas, que desarrollaban proyectos de generación de ingresos locales con los firmantes de paz y comunidades aledañas. Carla había adoptado dos perros de la comunidad y siempre la veía con ellos a donde ella fuera. En esta reunión se encontraba Rita también, miembro de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la agencia gubernamental que se encarga de la reincorporación de los firmantes de paz. Nunca he conocido

a nadie tan comprometido con su trabajo. Decidió trasladarse a este pueblo junto con su hijo y ahora desempeña un papel junto con los demás miembros de la comunidad.

Esa noche, compartimos nuestras propias visiones del mundo y experiencias de vida en una conversación mutua que nos hizo sentir que todos estábamos conectados. Mientras algunos firmantes de paz compartían sus vivencias en “el monte” durante los tiempos del conflicto, los demás respondían con las suyas al otro lado del conflicto o como víctimas.

La paz estaba representada en estos encuentros, en los que queríamos compartir nuestra vida con los demás sin esperar nada a cambio y sin reprochar la historia de los demás. Esa noche sentí nostalgia por mi país y por los colombianos, quienes, a pesar de haber sufrido tanto por el conflicto y la pobreza, siguen con su corazón intacto y dispuesto a compartir lo poco o mucho que tienen.

Ese día fue muy relevante para mi investigación. Pude entender los significados de la paz para quienes viven en la transición al posconflicto y la importancia del pasado y los legados en eso que llaman *la construcción de paz cotidiana*.

* * *

Usualmente la vida de excombatientes después de acuerdos de paz se centra en discursos normativos, estándares internacionales y un paquete de beneficios y responsabilidades que se traduce en un contrato social pactado entre el Gobierno y los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, más allá de esta estructura, las personas excombatientes se enfrentan a nuevas dinámicas emocionales, relaciones y sociales que van en paralelo con la transición formal que demanda la reintegración.

En este libro exploré la diversidad de interrelaciones, narrativas y prácticas locales que se funden entre el pasado y el presente de los firmantes del acuerdo de paz en Colombia en el 2016 y decidieron participar en iniciativas de reincorporación colectiva. A lo largo del libro, describo las prácticas cotidianas en la reincorporación y las nuevas estrategias que ellos han implementado para transformar su entorno en un mejor lugar para construir paz.

La escena anterior sobre mi experiencia en Llano Grande, uno de los espacios colectivos en los que se encuentran los firmantes de paz, es ilustrativa en este sentido. En primer lugar, muestro cómo la reincorporación colectiva no solo tiene que ver con la vida de personas que formaron parte de la guerrilla, sino también con aquellas personas que vivieron el conflicto y lo experimentaron de diferentes maneras. En segundo lugar, muestro cómo los significados de paz se construyen a partir de las relaciones locales y las nuevas redes de apoyo creadas en tiempo de (pos)conflicto. Por último, esta escena muestra

cómo la vida de los firmantes de paz no se divide en dos: su *pasado* y su *presente*, sino que muestra una dinámica que entrelaza los tiempos del conflicto y los procesos de transformación hacia el posconflicto. Estos encuentros de realidades construyen nuevas formas de entender las dinámicas sociales, políticas y económicas en contextos adversos, y así mismo, muestra una transformación de espacios en los que comunidades y excombatientes cohabitán. Esta escena me hizo pensar en el proceso de reincorporación más allá de los estándares del desarme, desmovilización y reintegración (DDR), en los que también interfieren significados, dimensiones, relaciones y dinámicas temporales.

Tradicionalmente, los discursos en torno a la reintegración de excombatientes se ilustran en las dimensiones que el DDR describe (social, política y económica) bajo una perspectiva universal, representada por discursos internacionales y posturas neoliberales (McMullin, 2013a; Nussio, 2011b). En este marco, estas personas son vistas como “receptoras de ‘paquetes de beneficios’ que tienen como objetivo principal minimizar la amenaza a la seguridad que ellas representan” (Robins y Bhandari, 2016, p. 14). Usualmente, son percibidas como potenciales saboteadoras en tiempos de construcción de paz, pues su experiencia en la insurgencia representa una “ruptura con la sociedad” y un riesgo durante los procesos de (pos)conflicto (Wiegink, 2014).

Sin embargo, estudios contemporáneos en el DDR muestran nuevas perspectivas de reintegración basadas en la importancia de los contextos y las experiencias cotidianas de personas excombatientes (Fattal, 2018; García, 2011; Nussio, 2011a; Wiegink, 2020). Esta literatura hace evidente la necesidad de abordarlas desde otro ángulo, como activistas sociales (Friðriksdóttir, 2018), veteranos político-ideológicos (Wiegink y Sprenkels, 2020) y actores con una vida política (Söderström, 2020) y un legado emocional (Nussio, 2012) que se mantiene y en ocasiones se fortalece durante su proceso de reintegración. Otros académicos se enfocan en el estudio de la agencia de excombatientes en toma de decisiones y su capacidad para planificar su vida después de la desmovilización (Friðriksdóttir, 2018; Mcevoy y Shirlow, 2009; Munive y Stepputat, 2015).

Se ha comprobado que mantener fuertes lazos sociales construidos entre excombatientes durante los períodos de posconflicto contribuye a los procesos de reintegración (De Vries y Wiegink, 2011; Nussio, 2012; Sprenkels, 2018; Wiegink, 2015). Estar juntos beneficia su acceso a sus necesidades básicas y genera un sentimiento de protección cuando existen problemas de seguridad (De Vries y Wiegink, 2011; McFee, 2016b). Lo mismo ocurre con la dimensión social, económica y política, que es más fácil de desarrollar cuando las personas excombatientes siguen unidas a sus antiguos mandos (Buxton, 2008; De Vries y Wiegink, 2011; Sally, 2018).

Sprenkels (2014) sostiene que los procesos de DDR no deben ser vistos bajo una perspectiva analítica, sino como un proceso relacional entre el pasado de

personas excombatientes y un presente en el que interactúan continuamente con dinámicas sociopolíticas. Para ello, él sustituye la palabra *reincorporación* por *reconversión*, la cual es definida como

el proceso por el cual los antiguos grupos insurgentes buscan adaptar estrategias colectivas e individuales en las dinámicas de paz, dotando de un nuevo uso a los diferentes tipos de capital adquiridos a lo largo de los años (político, militar, social y económico), con el propósito de fortalecer la acumulación sociopolítica en el nuevo contexto en el que habitan. (p. 8)

En consideración de lo anterior, este libro explora las dinámicas locales a partir de los encuentros cotidianos de los firmantes de paz con sus pares, familias y comunidades aledañas desde un análisis de los mundos sociales. El término *mundos sociales* es una perspectiva de los estudios microsociológicos que pretende analizar las dinámicas ejercidas por diferentes actores sociales considerando diversidad de ángulos y perspectivas, en la que se entrecruzan dimensiones estructurales, diversidad de agencias, poderes y hegemonías temporales (Strauss, 1978). Esa interacción no se hace en el vacío, sino que se construye a partir de las historias de vida y el legado que traen las personas excombatientes de su tiempo como guerrilleros.

Como base de mi análisis, me centré en los discursos críticos de reincorporación enmarcados en tres grandes dimensiones: las experiencias adquiridas por las personas excombatientes durante el conflicto (capital social, legado e identidad), el papel de las comunidades aledañas en la reincorporación (participación y enfoque participativo parte del DDR), y el papel de las personas excombatientes como actores políticos (agencia e ideología). Al centrarme en estas dimensiones, demuestro cómo la reincorporación colectiva puede ofrecer evidencias empíricas que contribuyen al gran marco de discursos alrededor del DDR. Sin embargo, también reconozco que el *pasado* en procesos de reintegración en Colombia y las grandes lecciones aprendidas no se deben desconocer, pues allí también interactúan aprendizajes del pasado con realidades presentes que se deben complementar para construir una “reintegración” que reconozca el legado histórico del DDR en Colombia.

La reincorporación colectiva es un concepto creado en el acuerdo de paz en Colombia por integrantes de las FARC-EP. Este exgrupo guerrillero intentó definir y aplicar la reincorporación más allá de una división entre el pasado y el presente, resistiéndose a dos discursos recurrentes del DDR: *la ruptura con la sociedad* y *la ruptura con el pasado* (Wiegink, 2014). Mientras que para los estándares del DDR, *la reintegración* es “el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren la condición de civiles y obtienen un empleo e ingresos

sostenibles” (Naciones Unidas, 2006, p. 5), para los firmantes de paz la reincorporación colectiva

busca potenciar las capacidades de personas excombatientes para que participen activamente en escenarios de construcción de paz, reconciliación, desarrollo comunitario y defensa de derechos, con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento del ejercicio autónomo de su ciudadanía. (Presidencia de la República, 2018, p. 19)

Entender la reincorporación bajo prácticas colectivas hace evidente que el tránsito a la sociedad no es la ruptura de dos etapas de la vida, sino la configuración de legados adquiridos en tiempos de conflicto como herramientas para integrarse mejor a la sociedad. En este sentido, la noción de *colectividad*

va más allá de constituirse como un grupo de individuos o un partido político; es una construcción social que supera una dimensión territorial, y se basa en una identidad compartida en la que sus miembros se cohesionan y construyen un sentido de pertenencia en torno a una serie de experiencias, símbolos, causas, valores, objetivos e intereses comunes enfocados a la consecución de una meta concreta, a la que cada individuo contribuye con su esfuerzo. (Presidencia de la República, 2018, p. 19)

Estudiar las prácticas de reincorporación colectiva desde una perspectiva local me permitió ver el papel activo de los firmantes de paz en la construcción de paz y los diferentes retos que enfrentan al interactuar con un sistema social que intenta invisibilizarlos al “insertarlos” en una sociedad como si fueran “cualquier otro” (McMullin, 2013a). Frente a esto, la reincorporación no puede ser la anulación del poder adquirido por las personas excombatientes en tiempos de conflicto o su adaptación en un entorno con altos niveles de fragmentación social, económica y política. Las acciones colectivas muestran cómo las iniciativas de los firmantes de paz intentan transformar las causas profundas del conflicto, fomentando nuevas alternativas de desarrollo y paz en los territorios en los que se asientan estos colectivos.

Contexto

Desde el 2017, el Gobierno de Colombia se ha encargado de implementar el proceso de reincorporación de más de 13 000 integrantes de las FARC-EP. Este proceso fue el resultado de cuatro años de negociaciones en La Habana,

Cuba, entre el 2012 y 2016, en el que no solo se discutió la reincorporación de las FARC-EP, sino también la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, un plan integral de desarrollo agrario, una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos y la reincorporación política, social y económica de los firmantes de paz (Presidencia de la República, 2016). A partir de estas negociaciones, ellos han tenido el compromiso de no solo cumplir con los requisitos de su proceso de reincorporación, sino también de contribuir a los seis puntos acordados en La Habana¹.

Durante los últimos treinta años, gran parte de la literatura sobre el DDR (especialmente la de reintegración) ha tomado forma con los estudios de caso sobre los diversos procesos de desmovilización en el mundo, lo que ha proporcionado lecciones aprendidas para los países que han firmado procesos de paz con grupos armados. La mayoría de las investigaciones sobre el DDR en Colombia se ha centrado en el proceso de reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia que tuvo lugar entre el 2003 y 2006. Otros estudios se han centrado en la desmovilización individual de combatientes de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como resultado de la estrategia de contrainsurgencia creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2003 y 2012. Todos estos estudios se centraron en un escenario de pre-posconflicto² (Theidon, 2015) y basaron sus discursos en la política de reintegración establecida por la antigua Alta Consejería para la Reintegración³, entidad del Gobierno nacional. Estudios posteriores han analizado el enfoque colectivo en la reincorporación a partir del último acuerdo de paz con las FARC-EP y los retos de esta perspectiva para la construcción de paz (Gluecker *et al.*, 2022; McFee y Rettberg, 2019; O'Brien, 2023; Segura y Stein, 2019; Zambrano Quintero, 2019).

Al acuñar el término *pre-posconflicto* o *(pos)conflicto*, en este libro identifico cómo el proceso de reincorporación de los firmantes de paz se encuentra en una fase de transición o superpuesta dentro de un conflicto aún sin resolver. En este contexto, las dinámicas previas al conflicto, como la presencia de otros grupos armados y la criminalidad, persisten en escenarios posteriores, lo que

1 Los seis puntos del acuerdo son reforma rural integral; fin del conflicto; participación política; solución al problema de las drogas ilícitas; acuerdo sobre las víctimas del conflicto y mecanismos de implementación y verificación (Presidencia de la República, 2016).

2 Theidon define este término como una fase transicional que contribuye al periodo de posconflicto, pero que aún no puede identificarse como tal, ya que las condiciones políticas, sociales y económicas no corresponden a un estado de posconflicto propiamente dicho.

3 Desde el 2003, esta entidad gubernamental se ha encargado de diseñar, implementar y supervisar los procesos de reintegración en Colombia atendiendo hasta ahora a más de 25 000 excombatientes.

demuestra una transición no lineal ni claramente definida como un periodo de posconflicto.

Las particularidades en las que se produjo el último acuerdo de paz con las FARC-EP, la trayectoria militar de esta guerrilla y las condiciones actuales del “posconflicto” sitúan este caso como único en comparación con otros procesos de DDR en Colombia y en el mundo. En primer lugar, desde el inicio del acuerdo de paz, las FARC-EP desempeñaron un papel activo en los acuerdos y exigieron como actores políticos tener una representación política en el Estado colombiano después de haber vivido más de cincuenta años de lucha. Esto demostró que los diálogos no fueron parte de una derrota militar, sino un esfuerzo por alcanzar la paz con justicia social (Arjona y Weintraub, 2020; Ávila, 2019; CSIVI-FARC, 2019).

En segundo lugar, durante las negociaciones, integrantes de las FARC-EP propusieron estrategias de construcción de paz que representaban su ideología y sus principios políticos, en un intento por mantener vivo su legado guerrillero en la transición al posconflicto. Con ello, el concepto de *reincorporación colectiva* toma otra dirección respecto a los enfoques tradicionales del DDR. En lugar de que sus integrantes fueran vistos como “sujetos individuales”, “receptores” y actores “pasivos” en la reincorporación, ellos querían ser vistos como actores colectivos y agentes de cambio en la construcción de paz.

La investigación

Esta investigación explora las múltiples tensiones y conexiones entre las trayectorias pasadas y presentes de los firmantes de paz, los procesos híbridos que se entrecruzan entre prácticas individuales y colectivas, y las nuevas iniciativas económicas, políticas y sociales que surgen a partir de una perspectiva colectiva en procesos de reintegración.

Más allá de la política de reincorporación, en este estudio analizo las diferentes vivencias sociales, económicas y políticas de los firmantes de paz en el ámbito local, los procesos híbridos entre el pasado y el presente y las prácticas individuales y colectivas. Al centrarme en las prácticas locales cotidianas desde diferentes enfoques, analizo cómo la comunidad de *exfarianos* construye su nuevo mundo social de forma colectiva, mientras vinculan sus prácticas locales a las dinámicas de las comunidades aledañas (Brinkman, 2012).

El análisis de los datos no se basó en estudios anteriores ni en hipótesis predefinidas, sino que se centró en una pregunta inicial que guio la recolección de datos empíricos (Nussio, 2011b). El método de investigación, y en especial el análisis de datos empíricos, no fue objeto de la teoría, por el contrario, el método fundamentó la teoría (Jenks, 1995).

En este sentido, mi interés no fue encontrar significados causales para definir el concepto de *reincorporación*, ni evaluar el éxito o el fracaso de este proceso, sino comprender los significados y las prácticas colectivas construidas en torno a la reincorporación con una investigación cualitativa descriptiva (Brinkman, 2012). Esto me permitió comprender la diversidad de subjetividades adscritas en las vidas de los firmantes de paz, sus historias de vida y prácticas cotidianas (Silverman, 2000). Así mismo, esto me acercó a una compleja producción de conocimientos en la que se entrelazaron sentimientos, emociones y pensamientos que me llevaron a entender más en profundidad lo que significa una transición a la reincorporación (Strauss y Corbin, 2002).

Este enfoque requirió el compromiso y el contacto directo con los firmantes de paz y un adentramiento profundo en el escenario en el que se desarrolló el trabajo de campo. Al poder tener este contacto directo con la realidad de la reincorporación, pude dibujar una imagen holística de una situación única, como lo ha sido el proceso de construcción de paz en Colombia, basada en una perspectiva inductiva (Ospina, 2004).

Para el logro de este objetivo, realice una investigación cualitativa con enfoque etnográfico como el método de investigación más apropiado para analizar en detalle las prácticas locales de reincorporación colectiva, la paz local y las relaciones construidas entre diferentes actores que activamente han formado parte de la reincorporación de los firmantes de paz. Mediante el análisis de estos aspectos, pude identificar las continuidades y discontinuidades sociológicas y cognitivas en su transición hacia la reincorporación (Duclos, 2012). Este enfoque no fue “ni lineal ni circular, sino más bien una caída turbulenta de varias piezas” (Goetze, 2017, p. 34).

La investigación a nivel micro me permitió identificar las experiencias individuales y colectivas de los combatientes y no combatientes en sus transiciones al (pos)conflicto y los impactos en la transformación de las identidades políticas y sociales (Kalivas, 2012). Me acerqué a los estudios de la microsociología dando valor a las interacciones sociales cara a cara de los firmantes de paz y sus comunidades aledañas en tres territorios diferentes de Colombia en los que se interrelacionaron particularidades espaciotemporales. De acuerdo con esto, defino mi metodología de investigación como una etnografía multisituada.

El término *etnografía multisituada* o *multilocal* surgió en la década de los ochenta con el propósito de analizar las interrelaciones que habitan en los espacios y los elementos comunes que los trascienden (Falzon, 2009). Este enfoque no intenta desarrollar una comprensión teórica de los espacios, sino busca llevar a cabo un análisis de la complejidad de los espacios sociales entendidos como entidades móviles (Halbmayer, 2018).

La investigación multisituada implica una especie de descentramiento espacial, en el que el sitio no siempre se relaciona con la ubicación o el lugar,

sino también con diferentes perspectivas sociales (Falzon, 2009). Es decir, el espacio por sí mismo no existe si no ha sido creado por las personas y sus interrelaciones (Lefebvre, 1991). “En consecuencia, los espacios no se limitan a un marco biofísico, sino a espacios sociales, creados y producidos socialmente por las comunidades” (Halbmayer, 2018, p. 29). Más que una representación holística de todo un fenómeno, la etnografía multisiituada analiza un terreno cartográfico que sirve de base para crear un retrato etnográfico de diferentes mundos sociales, en el que los patrones comunes y las realidades similares se convierten en las categorías clave del análisis (Marcus, 1995).

En mi trabajo de campo, la reincorporación colectiva implicó una perspectiva a nivel translocal que no hacía alusión a un solo lugar en Colombia, sino a múltiples escenarios con particularidades similares (Hannerz, 2003). Por lo tanto, los “casos” de estudio no fueron vistos como una agrupación de unidades locales aisladas, sino de interrelaciones y relaciones translocales construidas en escenarios en los que los actores ejercían su agencia, compartían símbolos en el lenguaje y en su comportamiento verbal y rutinas cotidianas (Marcus, 1995).

Al considerar esta perspectiva, examiné el flujo de significados, objetos e identidades en un espacio-tiempo que trasciende estructuras espaciales delimitadas (Björkdahl y Kappler, 2017). Este enfoque reflexivo reconoce que, aunque el conocimiento está limitado por el contexto, los casos “hablan entre sí” y sobrepasan las particularidades de cada contexto al encontrarse en puntos comunes, que llevan a crear nuevos conceptos a partir de esta interacción local (Gingrich y Fox, 2002).

En esta investigación, el término *bifocalidad* lo utilicé para entender la vida en contextos locales y su relación con un mundo global interconectado, conformado por identidades comunitarias que se integran bajo una idea de “nosotros”, que implica diferentes matices que se mezclan con factores externos que definen quién está incluido o excluido de ese “nosotros” (Gupta y Ferguson, 1992). En el caso de esta investigación, los lugares en los que se encuentran los firmantes de paz muestran una representación clara de ese “nosotros”. Allí, el “nosotros” sobrepasa los espacios geográficos, mostrando un espacio local disperso en el que se interrelacionan necesidades, intereses y retos en el tránsito a la reincorporación.

De acuerdo con lo anterior, en este libro no busqué tener una muestra representativa de las dinámicas globales de la reincorporación; tampoco quería demostrar que la reincorporación colectiva era un modelo perfecto para replicar en otros procesos de reintegración alrededor del mundo, ya que estas posturas me parecen subjetivas y arbitrarias. La apuesta es analizar las prácticas colectivas de un *pasado* en un *presente* en contextos con tiempos y espacios definidos, y a pesar de que entre estas haya diferencias, también existen semejanzas que

dan muestra de esa característica translocal en la que viven los firmantes de paz en diferentes territorios de Colombia.

Las experiencias y vivencias de las FARC-EP en la reincorporación fueron analizadas *in situ*, no solo mediante la realización de entrevistas, sino también con la observación no participante y la observación participativa. En el proceso de recolección de datos, valoré la incertidumbre a lo largo de la investigación (sin la necesidad de categorizar respuestas correctas o incorrectas) (Borg *et al.*, 2012). Al hacerlo, no buscaba la validación de la teoría o sobre generalizaciones frente a un fenómeno. De hecho, asumí que estas generalizaciones suelen reforzar la típica idea romántica de ver a las comunidades locales como una entidad homogénea con ausencia de poder (Paffenholz, 2014).

Por consiguiente, este estudio no ofrece una historia o narrativa única sobre el proceso de reincorporación. La variedad de historias de las personas que se leerán a lo largo de este libro enriqueció los datos recogidos y demostró que la diversidad puede utilizarse como una herramienta potencial para promover la paz. Por lo tanto, intenté no seguir los patrones tradicionales de los “excombatientes buenos o malos” que usualmente se crean a lo largo de los discursos de construcción de paz, en los que se premian algunos perfiles y se castigan otros (Hirblinger y Simons, 2015). Más bien, mi intención en este libro era entender a los firmantes de paz como seres humanos que se enfrentan a retos personales, sociales y culturales que son complejos de sobrelevar al estar inmersos en entornos socialmente deteriorados por una cultura de guerra y polarización.

El trabajo de campo de esta investigación lo desarrollé en tres territorios de Colombia: Agua Bonita en Caquetá; San José de León en el Urabá Antioqueño, y Llano Grande en Antioquia. Los siguientes factores influyeron en la selección de estos tres territorios: (1) la disposición de la comunidad a aceptar y apoyar mi investigación que dio como resultado este libro; (2) mi experiencia de trabajo previa en estos territorios; (3) el número de los firmantes de paz que seguían viviendo en los territorios de forma colectiva, y (4) las iniciativas colectivas sociales y económicas surgidas en estos territorios. Además, consideré la información proporcionada en informes y evaluaciones sobre las condiciones actuales de seguridad de los antiguos espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación (AETCR) y nuevas áreas de reincorporación (NAR), la relación que las FARC-EP tuvieron en épocas anteriores con las comunidades aledañas, y la presencia de bandas disidentes y criminales en estos territorios⁴.

⁴ Mientras que en el norte de Colombia los grupos que predominaron fueron los paramilitares, en el sur la guerrilla de las FARC-EP fue la que controló estas zonas por varios años (Ávila, 2019).

En estos lugares, permanecí aproximadamente siete meses en dos años consecutivos (2018 y 2019). Durante este tiempo, participé en la mayoría de las actividades llevadas a cabo en estos territorios, como talleres, fiestas, vida familiar, reuniones, producción de cultivos y actividades sociales. Los principales métodos de recolección de datos fueron la observación participante y las entrevistas. Además, utilicé la charla informal como forma de conocer a los interlocutores, para lograr familiaridad y construir *rapport* (Driessen y Jansen, 2013).

En total, realicé 58 entrevistas con los firmantes de paz, 14 con miembros de la comunidad y 4 con representantes del Gobierno. Estas entrevistas se complementaron con innumerables conversaciones informales, 103 diarios de campo y valiosas charlas en los encuentros cotidianos con la comunidad de las FARC-EP. La mayoría de las conversaciones o entrevistas que manejé no se rigió por unas preguntas específicas, sino que se adaptó a las condiciones del entorno, a las particularidades de la persona entrevistada y a su disposición para intercambiar información. La observación participante la llevé a cabo en las actividades sociales, las reuniones generales, las jornadas comunitarias, los días de siembra y cosecha, las discusiones políticas y la vida cotidiana. Cabe aclarar que en este estudio no contemplé las voces de entes gubernamentales o expertos políticos nacionales o internacionales que formaron parte del acuerdo de paz; en su lugar, quise dar prioridad a las experiencias y los conocimientos de las comunidades locales que nunca han pertenecido a una élite específica y que rara vez tienen poder y oportunidades para que su voz sea escuchada (Geroid, 2014).

Todos los nombres utilizados en esta investigación son seudónimos para proteger la identidad de los participantes. Aquellas personas que tomaron parte en esta investigación aprobaron voluntariamente su participación y no pidieron nada a cambio. Los nombres de los AETCR, NAR, pueblos e instituciones que menciono en este libro mantienen su nombre original. La información recolectada la organicé en un sistema de códigos abiertos que me ayudó a descubrir teorías fundamentadas mientras agrupaba, organizaba, sintetizaba y priorizaba la información. Los códigos globales se convirtieron en las categorías de mi análisis, incluyendo un conjunto de subcódigos que proporcionaron una información detallada sobre cada código abierto. En este proceso, creé patrones de conceptos a partir de la repetición de la argumentación, las prácticas y los conceptos mencionados por los firmantes de paz. El proceso de codificación implicó no solo la identificación de elementos concretos, sino también de ideas y significados. Cada código lo relacioné con una codificación específica que proporcionó información detallada basada en los principales códigos dominantes y subdominantes.

Durante mi primer trabajo de campo entre octubre y diciembre del 2018, me dirigí a los firmantes de paz y comunidad aledaña con preguntas generales

que guiaron mi camino en la escritura de este libro. En mi segundo trabajo de campo, entre octubre del 2019 y enero del 2020, mis observaciones y entrevistas fueron más focalizadas y apuntaron a los intereses específicos que quería perseguir. También analicé alguna información audiovisual como fotos, entrevistas y documentales sobre la reincorporación de las FARC-EP.

Toda la información mencionada la organicé y analicé en el programa MAXQDA. Primero, distribuí la información en códigos abiertos, en los que etiqueté grupos de información y seleccioné categorías específicas para crear una agrupación de códigos. Después, identifiqué los patrones de asociación con la categoría principal, y luego relacioné categorías y subcategorías, lo que se denomina *categorización axial* (siguiendo las técnicas y los procedimientos de Strauss y Corbin, 2002). En total, creé 11 categorías y en 55 subcategorías agrupé los códigos identificados en el análisis de datos. La definición de las categorías orientó la estructura de mi investigación, la distribución de los capítulos de este libro y la priorización de unos temas sobre otros.

En mi investigación, mi subjetividad fue una herramienta valiosa para enriquecer este libro. A lo largo de todo el proceso, mantuve presente en el análisis de datos la influencia de mi experiencia como mujer colombiana de Bogotá, de clase media, así como mi trayectoria profesional trabajando por diez años en temas de paz y desarrollo en Colombia. Durante gran parte de este tiempo, tuve la oportunidad de interactuar con exintegrantes de grupos guerrilleros y paramilitares, lo cual marcó profundamente mi perspectiva y enriqueció mi comprensión de los temas tratados. Bryman (2012) sostiene que los investigadores sociales deben mantener una actitud reflexiva sobre las implicaciones de sus métodos, valores, sesgos y decisiones al momento de producir conocimiento sobre el mundo social. Frente a esto, la solución no es eliminar la subjetividad del investigador, sino reconocerla (Finlay, 2002).

Mis subjetividades junto con las voces de los firmantes de paz ayudaron a la construcción de los discursos de este libro, lo que de alguna manera representa parte de mi biografía, mis estudios académicos, mi experiencia laboral, mi papel como colombiana y migrante viviendo en Alemania.

Términos y definiciones

Cuando menciono el término *firmantes de paz*, me refiero a aquellas mujeres y hombres que fueron combatientes de las FARC-EP y parte del acuerdo de paz firmado en Colombia en el 2016. La mayoría de ellos están involucrados en acciones de reincorporación colectiva y se encuentran viviendo en los AETCR o en las NAR. En ocasiones uso el término *excombatientes* para referirme a los discursos de reintegración manejados por los académicos o a las políticas de

reintegración, o cuando me refiero al universo de excombatientes, o simplemente para evitar la repetición de palabras. En esta investigación no me centro en los excombatientes que decidieron continuar una reincorporación individual, ni tampoco hablo de los excombatientes de las FARC-EP que formaron parte de procesos de DDR en el pasado (los llamados *desertores*, parte de las acciones de contrainsurgencia implementadas por el Gobierno desde el 2002 hasta el 2014).

Cuando me refiero a los *farianos*, denoto al grupo de los firmantes de paz mujeres y hombres de las FARC-EP que aún actúan bajo un colectivo y se sienten representados por sus legados guerrilleros. He tratado de evitar el uso del término excombatientes cuando me refiero al colectivo de farianos, ya que para ellos este término no los representa, pues debilita la voluntad de los exguerrilleros de seguir luchando por causas sociales. Ellos aseguran que siguen *combatiendo*, pero ahora sin armas.

A partir de ahora, me referiré a *reincorporación* en lugar de reintegración, término definido por los firmantes de paz en el acuerdo de paz del 2016. A lo largo de este libro, entiendo la *reincorporación* como un proceso fluido que no tiene divisiones entre *pasado* y *presente*, sino que representa un ciclo en el que intervienen diferentes espacios, temporalidades y mundos sociales.

El término *comunidades aledañas* es comúnmente utilizado a lo largo de este libro y se refiere al entorno social inmediato con el que interactúan los firmantes de paz y del que depende en gran medida su reincorporación (McFee, 2016b; Nussio, 2011b). La relación que estos actores tienen con los firmantes de paz contribuye a ampliar las redes sociales que ellos han construido no solo después del acuerdo de paz, sino también durante tiempos de militancia, lo que ha aportado a la consolidación de la confianza, la aceptación y la minimización del estigma y el prejuicio que se ha tenido hacia estos grupos guerrilleros.

Hago una distinción entre los firmantes de paz y las comunidades aledañas solo por cuestiones de redacción, pero no significa una dicotomía entre “victima” y “excombatiente”. Entiendo a estos actores como sujetos interdependientes que avanzan a la par en entornos de (pos)conflicto. En este sentido, sigo las perspectivas de diferentes estudiosos que afirman que la política de la violencia da forma a las relaciones construidas entre víctimas y no víctimas e influye en su posible coexistencia pacífica (véanse, por ejemplo, los estudios de Kaplan y Nussio, 2015).

El término *local* engloba la pluralidad, las redes y las relaciones construidas entre los diferentes actores de una comunidad (Hughes *et al.*, 2015; Mac Ginty, 2015). El término *local-local* se refiere a las dinámicas naturales que se ejercen entre personas que tienen condiciones de poder similares y que interactúan en contextos específicos (Richmond, 2011). Estas relaciones *locales-locales*

están representadas por la naturalización de patrones ejercidos por miembros de estas estructuras locales (Randazzo, 2016) quienes se relacionan por medio de patrones informales y prácticas sociales en su vida cotidiana (Mac Ginty, 2013). En estos encuentros se reproduce diversidad de significados y prácticas producidas por la interacción y las experiencias de los individuos, que representan, por tanto, una diversidad de realidades e interacciones que recrean una unidad de organización social (Unruh, 1980). En este libro me refiero a lo *local-local* como las relaciones que los firmantes de paz establecen con las comunidades aledañas y la construcción de diferentes símbolos, emociones y discursos surgidos de estas relaciones.

Por su parte, las *prácticas locales* se refieren a las iniciativas locales que las personas en proceso de reincorporación o las comunidades aledañas ejercen para lograr su desarrollo individual y social. Este proceso implica el reconocimiento de la agencia local, el empoderamiento y la participación en la transformación local.

Estructura del libro

El presente libro se divide en seis capítulos. En el primer capítulo describo la trayectoria del DDR considerando su base conceptual, sus fases y los retos a los que se ha enfrentado. Luego expongo los orígenes y la evolución de las FARC-EP, el fin del conflicto y la política de reincorporación actual en Colombia.

En el segundo capítulo, explico los diferentes significados de la reincorporación colectiva y los retos y beneficios de aplicar este tipo de enfoque. Para ello, analizo la diferencia entre reintegración y reincorporación para los firmantes de paz, centrándome particularmente en el concepto de *colectividad* y su relación con aspectos emocionales, sociales y políticos. Posteriormente, desarrollo los significados de *la paz* desde la mirada de los firmantes de paz, los cuales se relacionan con el concepto de paz local con justicia social. Por último, me centro en los diferentes retos a los que se enfrentan las mujeres firmantes de paz al reincorporarse a una sociedad patriarcal. Concluyo diciendo que los significados en torno a la reincorporación están continuamente en disputa y cambian de acuerdo con la influencia del legado fariano en la reincorporación política, social y económica de sus exintegrantes.

En el tercer capítulo, “Más allá de la corriente principal: dimensiones en la reincorporación colectiva”, analizo tres categorías en la reincorporación —social, económica y política— a partir de la perspectiva de la reincorporación colectiva. Allí, discuto los retos internos y externos del que fue llamado en un principio partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ahora Comunes para convertirse en un partido político en Colombia.

Termino el capítulo mencionando que la creación de un partido político no es el principal logro en la reincorporación política de los firmantes de paz, sino la influencia política local que ejercen en los territorios en los que ellos se asientan. Con relación a la reincorporación económica, analizo el enfoque de “cooperativa” y de autosostenibilidad que busca lograr el colectivo de las ex-FARC-EP, así como la fusión de iniciativas económicas individuales y colectivas. Abordo la reincorporación social valorando la visibilidad y el reconocimiento de los firmantes de paz en la sociedad como agentes activos en los procesos de construcción de paz, como también el fortalecimiento del tejido social con las comunidades receptoras, la sociedad en general y las instituciones.

En el cuarto capítulo, “La vida cotidiana de la reincorporación colectiva: realidades en tandem”, analizo el tránsito del pasado al presente en la vida de los firmantes de paz, centrándome en sus prácticas cotidianas de reincorporación. En este capítulo, en la transición a la reincorporación reflexiono sobre la influencia de las ideologías, las identidades sociales y los artefactos adquiridos en tiempos de conflicto. Así mismo, muestro cómo la transición a la vida civil crea nuevas formas de vida, pensamiento e identidad en ellos, configurando una interesante fusión que combina las dinámicas militares con las demandas sociales.

Centrándome en la teoría de los mundos sociales, en el capítulo quinto “Mundos sociales, poder(es) y paz territorial en la reincorporación colectiva” analizo las diversas interacciones sociales que los firmantes de paz mantienen con otros grupos. En este capítulo identifico los diferentes patrones de poder, identidad y agencia que tienen los otros grupos con los que interactúan. Allí contrasto los beneficios de la reincorporación para los entes estatales, los grupos sociales y las comunidades locales, junto con las dinámicas de poder que los firmantes de paz ejercen en estas instancias. Finalmente, analizo la importancia de la agencia en la relación cotidiana entre *locales-locals* como herramienta para construir mundos sociales que pueden contribuir en la formación de la paz territorial.

Por último, en el capítulo sexto retomo los hallazgos de la investigación, la limitación interna y externa de la reincorporación colectiva y sugiero posibles vías para seguir investigando sobre la reincorporación y el DDR.

1

Antecedentes del desarme, la desmovilización y la reintegración: el caso colombiano

Trayectoria del DDR

Desde el fin de la Guerra Fría a finales de los años ochenta, la comunidad internacional se enfrentó a nuevos retos de seguridad relacionados con la violencia interna y el fracaso de los Estados (Leonardsson y Rudd, 2015). Para hacer frente a estos retos, las hegemonías liberales desarrollaron estrategias de apoyo a los países en situación de posconflicto basadas en la idea de que la “paz democrática” era la única forma de “lograr la paz” (Newman *et al.*, 2009). Esta idea pretendía no solo lograr negociaciones de paz democráticas o el alto el fuego de los grupos armados, sino también garantizar un desarrollo económico basado en el mercado (Chandler, 2010). En este contexto, el ejercicio del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos proporcionaron unas condiciones en las que se operacionalizó e implementó la paz liberal (Chandler, 2010; Mitchell y Richmond, 2012; Newman *et al.*, 2009).

Durante la Guerra Fría (1947-1991), los programas de seguridad para el posconflicto se centraban en el desmantelamiento de las fuerzas armadas ilegales, mientras proporcionaban seguridad a los países en desarrollo y supervisaban el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales en las negociaciones de paz (McMullin, 2013a; Willems y Leeuwen, 2015). Al desarmar a los actores no estatales, el Estado podía establecer el control sobre el territorio centralizando sus poderes y demostrándoles a los ciudadanos que el Estado era el único ente que podía protegerlos de cualquier amenaza (Mac Ginty, 2011). Para contrarrestar las críticas que cuestionaban

hasta qué punto las operaciones internacionales promovían la paz (Stankovic y Torjesen, 2010) y la seguridad del Estado proporcionaba las condiciones para esta (Naciones Unidas, 2010), las organizaciones internacionales (encabezadas por las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas) crearon una estrategia como parte de la agenda de paz liberal denominada “desarme, desmovilización y reintegración (DDR)” (Weinstein y Humphreys, 2005).

En la década de los noventa¹, en el marco de los acuerdos de paz el DDR fue creado para enfrentar primordialmente a los ejércitos estatutarios e insurgentes, como parte de la transición de la guerra a la paz (Munive y Stepputat, 2015). En el 2000, dio un vuelco en su perspectiva, más allá de una apuesta a la seguridad, al abarcar una visión de paz con enfoque de desarrollo (Naciones Unidas, 2010).

Desde su aparición, el DDR se ha implementado en más de 60 países de todo el mundo, en los que las guerras civiles han concluido con la victoria de una de las partes o como parte del apoyo internacional a los procesos de paz (Muggah, 2014). Según las Naciones Unidas, en el 2016 un total de 406 029 personas se beneficiaron de los programas de DDR, y entre el 2017 y 2018 se invirtieron 34 423 958 dólares estadounidenses en estos (Naciones Unidas, 2017). Aproximadamente 300 000 excombatientes formaron parte de los programas de DDR en 20 operaciones diferentes entre el 2011 y el 2012 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [UNDP, por sus siglas en inglés], 2013).

El presupuesto de los programas de DDR ha variado entre 1,2 millones de dólares (Islas Salomón) y 302,6 millones de dólares (Colombia) (Banholzer, 2011). Solo en África, en el 2019, más de dos tercios de los 54 países africanos los implementaron, en su mayoría con la ayuda de las Naciones Unidas (Ayissi, 2021). En la actualidad, el DDR se percibe como una de las mayores intervenciones de las operaciones de mantenimiento de la paz a gran escala de las Naciones Unidas y uno de los aspectos centrales de la paz, la seguridad y el desarrollo en los países (Berdal y Ucko, 2013; Muggah y O'Donnell, 2015).

El DDR comprende tres acciones principales: desarme, desmovilización y reintegración. El desarme tiene como objetivo recoger, documentar, controlar y eliminar las armas, y desarrollar programas de gestión responsable de estas en un contexto de posconflicto. Esta fase implica un contrato social en el que los excombatientes entregan sus armas a cambio de obtener mejores oportunidades como amnistías o provisiones económicas (Knight y Özerdem, 2004).

¹ La primera desmovilización de tropas tuvo lugar en Nicaragua y Namibia en 1989 y en El Salvador en 1992 (Bendaña, 1994; Segovia, 2009). Después en Centroamérica se dieron procesos de DDR similares en El Salvador y Guatemala, en los que se desmovilizaron 18 000 combatientes a principios de la década de los noventa. En los años siguientes, se desmovilizaron 101 000 combatientes en Liberia y 260 000 en la República Democrática del Congo (Cockayne y O'Neil, 2015).

La desmovilización busca el desarme formal y controlado de los militantes de las fuerzas u otros grupos armados. La reincorporación ofrece garantías económicas, sociales y políticas a los excombatientes para que se integren en la sociedad civil (Naciones Unidas, 2006). Otros enfoques añaden la reinserción y la rehabilitación como parte del proceso de DDR, por lo que se convierten en DDDR. La reinserción implica el paquete de medidas que se ofrece a los excombatientes inmediatamente después de la desmovilización, antes de que comience su proceso de reincorporación (Isima, 2004). Este proceso incluye la orientación después del desarme, la asistencia alimentaria, el apoyo sanitario y educativo, y la asistencia financiera (Özerdem, 2013). La rehabilitación se refiere principalmente al apoyo adicional en el proceso de reincorporación que se les ofrece a niñas y niños exsoldados, a los excombatientes discapacitados y con problemas psicosociales (Naciones Unidas, 2006). Aparte de estas dimensiones, se han creado otros enfoques que han cambiado el orden de la implementación, poniéndole énfasis primero a la reintegración y luego al desarme; a este enfoque se le ha llamado R2D2 o RRDD (reincorporación, reintegración, desmovilización, desarme)² (Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración [CIDDR], 2009).

Sin embargo, las fases del DDR no significan que en la práctica estén desarticuladas unas de otras. Estas se relacionan y se refuerzan mutuamente en un enfoque secuencial, pero no en uno lineal (Berdal y Ucko, 2013; Stankovic y Torjesen, 2010). La implementación de los programas de DDR depende de las particularidades del conflicto, los intereses y necesidades de las partes del conflicto y la variedad de factores socioeconómicos y políticos de los entornos. Algunos estudios afirman que convertir el DDR en RDD es la mejor estrategia para facilitar procesos de seguridad y confianza en la reincorporación³ (Stankovic y Torjesen, 2010; Torjesen y MacFarlane, 2007). La separación de la R de la DD, por ejemplo, se ha implementado especialmente en aquellos países en los que persiste una cultura de las armas, como es el caso de Afganistán (Muggah y O'Donnell, 2015).

Desde sus inicios, el DDR ha pasado de ser un enfoque minimalista de seguridad a un enfoque maximalista de desarrollo multidimensional (Muggah, 2009, 2010; Özerdem, 2013), que se ha implementado en acuerdos unilaterales, bilaterales o multilaterales, ya sea en el cese completo de un conflicto parcial

² La proliferación de diferentes R no tuvo un impacto relevante en la operación del DDR. Más bien esto ha expuesto la complejidad de la fase de reincorporación en la práctica. Para esto, algunos contextos han requerido otro enfoque, como comenzar con los incentivos económicos de la reincorporación y terminar solo con alguna forma de desarme o control de armas (CIDDR, 2009).

³ Véanse, por ejemplo, los casos de Tayikistán y Liberia (Jennings, 2007; Torjesen y MacFarlane, 2007).

o solo implementando un componente del DDR (Özerdem, 2013). El enfoque minimalista lo concibe desde una perspectiva de seguridad y define a los excombatientes como una amenaza para la paz, principalmente por tres razones: su propensión al uso de las armas, sus antiguas ideologías militares y su falta de competencias para la empleabilidad, lo que los convierte en un riesgo para la población, pues son susceptibles de involucrarse en actividades delictivas (Özerdem, 2013). En este contexto, los excombatientes son percibidos como la “generación perdida”, ya que durante el conflicto ellos no fueron parte de una formación educativa tradicional, un empleo formal o alguna formación para el trabajo (Naciones Unidas, 2006). Sin embargo, durante el conflicto, integrantes de grupos armados adquirieron otras competencias que pueden usarse de manera positiva en tiempos de paz.

Frente a esto, el enfoque maximalista apuesta por un desarrollo holístico del DDR y multidimensional para la reintegración, en el que se establecen agendas de paz en las que se implementan procesos económicos, políticos y sociales a largo plazo (Munive y Stepputat, 2015). En este marco, los excombatientes son tratados como un grupo afectado por el conflicto, pero con grandes capacidades para contribuir a los procesos de construcción de paz (Stankovic y Torjesen, 2010). Allí las comunidades y las familias receptoras son actores indispensables en esta transición y se convierten en pieza clave en los programas de reincorporación (Özerdem, 2009; Naciones Unidas, 2006). Estas poblaciones contribuyen a minimizar los prejuicios hacia los excombatientes mientras contribuyen a una integración de las intervenciones de DDR con otras acciones en beneficio de la construcción de paz (Naciones Unidas, 2006).

La evolución del DDR en los últimos treinta años, unida a las particularidades de los conflictos y las políticas emergentes en todo el mundo, ha llevado a una evolución en la aplicación de este enfoque. Para poder aclarar las fases del DDR, a continuación, describo esta evolución enmarcada en tres grandes generaciones.

Generaciones del DDR

El DDR ha enfrentado varios retos durante sus últimas tres décadas de operación. Sus perspectivas operativas e instrumentales han cambiado de acuerdo con las nuevas estructuras de violencia, las dinámicas del conflicto y la evolución y operación de los grupos armados⁴. La literatura lo ha enmarcado en

⁴ El diseño y la implementación del DDR contempla los siguientes aspectos: la naturaleza del conflicto y la paz, la voluntad política y las particularidades sociales de las partes interesadas, la capacidad institucional y la calidad de la gobernanza, las condiciones económicas y los contextos culturales (CIDDR, 2009).

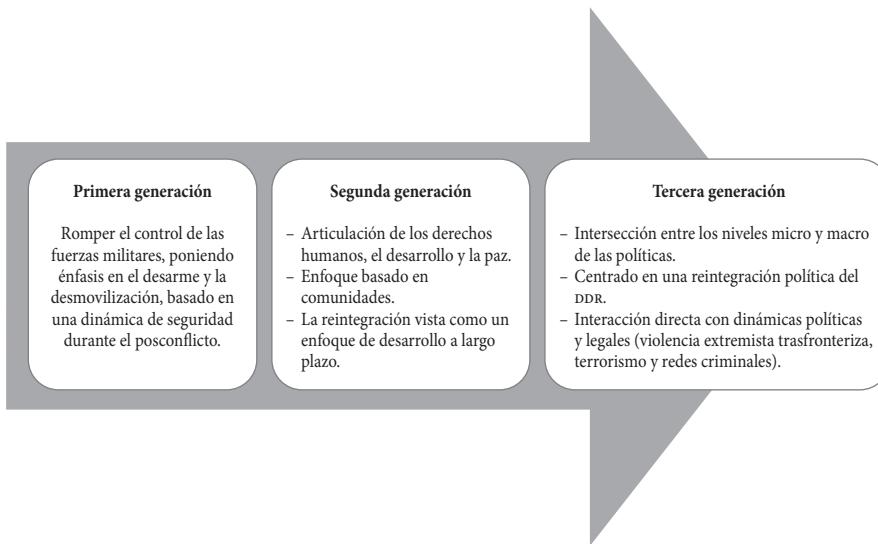


Figura 1. Generaciones del DDR

Fuente: elaboración propia.

tres grandes generaciones, que muestran la evolución de este en términos de discursos políticos, programación e intervenciones (véase la figura 1).

Durante la década de los noventa, la primera generación del DDR se creó para ayudar a los países que atravesaban guerras civiles prolongadas, centrándose en los problemas de seguridad y enfocándose en la desmovilización de combatientes (Stankovic y Torjesen, 2010): el DDR implicaba dividir directamente el control de las fuerzas militares desde los rangos superiores hasta los soldados rasos y el declive del dominio militar, seguido de una breve ayuda para la reincorporación económica (Muggah y O'Donnell, 2015). Este periodo fue titulado por Knight y Özerdem (2004) como “armas, campamentos y dinero en efectivo”⁵, ya que ofrecía una perspectiva limitada del DDR, en la que se pasaban por alto las implicaciones económicas, sociales y políticas surgidas tras el conflicto. El alcance limitado del DDR solo buscaba proteger al Estado de los riesgos de seguridad mediante el control de los excombatientes para evitar que tomaran represalias contra el poder del Estado, lo que Mashike (2004) explica con esta metáfora: “Los excombatientes son considerados como bombas de relojería que hacen tic tac lentamente” (p. 10).

⁵ Véanse, por ejemplo, los programas desarrollados en Sierra Leona, Liberia, Sudán del Sur y Nepal (Munive, 2016).

La primera generación del DDR se caracterizó por la construcción de Estados fuertes reforzados mutuamente al final de la era colonial (Piedmont, 2015). En aquella época, el DDR se centraba exclusivamente en “objetivos militares y de seguridad, lo que a su vez dio lugar a un relativo aislamiento del creciente ámbito de la justicia transicional y de sus preocupaciones por el esclarecimiento histórico, la justicia, las reparaciones y la reconciliación” (Theidon, 2007, p. 2). Además, los objetivos del DDR y la justicia transicional no establecieron las bases para la transformación del conflicto, sino que tendieron a mantener sus estructuras y a obstaculizar los procesos de reconciliación (Acosta-Navas y Reyes, 2018). Por ejemplo, los programas de reincorporación se basaron en los discursos del conflicto, más que en las prácticas de reconciliación (Labrador y Gómez, 2007).

En este sentido, la primera generación del DDR ofreció beneficios a los excombatientes solo para evitar su reintegro a las fuerzas armadas, el retorno de la violencia política o el surgimiento de bandas criminales y problemas de gobernabilidad (Muggah y O'Donnell, 2015; Piedmont, 2015). Esta perspectiva trajo efectos adversos como en el caso de Guatemala y El Salvador, en los que, en la posguerra, los miembros de las pandillas juveniles (las llamadas *maras*) fueron deportados de Estados Unidos, en virtud de una ley creada por este país tras el acuerdo de paz, denominada Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Esta ley trasladaba a jóvenes delincuentes y miembros de pandillas desde las cárceles estadounidenses a Centroamérica sin ningún tipo de supervisión, rehabilitación o proceso de reincorporación, lo que al final provocó un reclutamiento masivo de nuevos miembros para las maras en Guatemala y El Salvador entre la población local (Hernández, 2019; Seeike, 2014).

Las experiencias acumuladas, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en materia de DDR condujeron a la creación en el 2006 de los “Estándares integrales de desarme, desmovilización y reintegración” por parte de las Naciones Unidas y del grupo de trabajo interinstitucional del DDR compuesto por 22 entidades de este mismo organismo. Estos estándares sentaron las bases de la segunda generación y proporcionaron una guía operativa para implementar este programa. Hasta la fecha, los “Estándares integrales de desarme, desmovilización y reintegración” se han convertido en el enfoque de DDR más reconocido e influyente entre todos los actores de las Naciones Unidas, pues este ofrece un paquete de mecanismos concretos basados en un conjunto de principios, prácticas y orientaciones políticas específicas que describe claramente el desarrollo del programa de DDR en la práctica (Naciones Unidas, 2006 y 2019).

Con estos estándares, surge la segunda generación del DDR, que se centró en las perspectivas comunitarias y en los enfoques ascendentes, mostrando flexibilidad en su implementación (Naciones Unidas, 2006). Como señala

Muggah (2010): “Un mantra común hoy en día es que el DDR nunca debe basarse en un plan fijo” (p. 4). Su implementación requiere el conocimiento del contexto histórico y político en el que se desarrollan los procesos de paz (Naciones Unidas, 2019c). Stankovic y Torjesen (2010) describen las particularidades de la segunda generación de la siguiente manera:

Las intervenciones [del DDR] se basan explícitamente en las normas culturales locales en lugar de incentivos rígidos; se enfocan en los civiles y en los miembros de los grupos delincuenciales, más que en aquellos que fueron parte de grupos armados, y se apoyan en los líderes comunitarios y asociaciones en lugar de instituciones públicas nacionales. (p. 13)

En esta segunda generación, el DDR se dirigió a actores y propósitos diferentes. En consecuencia, las familias y las comunidades comenzaron a formar parte de los procesos de reintegración, minimizando las divisiones simbólicas y territoriales entre los excombatientes y sus entornos (Stankovic y Torjesen, 2010; Naciones Unidas, 2006). En este contexto, los discursos críticos sobre la paz, los derechos humanos y el desarrollo convirtieron al DDR en un enfoque de paz positiva, en el que la reincorporación se transformó en una perspectiva de desarrollo multidimensional a largo plazo (Stankovic y Torjesen, 2010). Asimismo, comenzó a vincularse de mejor manera con diferentes programas políticos, económicos y sociales, y pasó a formar parte de manera integral de la reconstrucción del posconflicto (Willems y Leeuwen, 2015).

A partir de entonces, el DDR comenzó a vincularse con el desarrollo económico, la gobernanza local, la justicia, la reconciliación, la reforma del sistema de seguridad, los enfoques diferenciales y la creación de capacidades locales (Naciones Unidas, 2010). El DDR sirvió de “puente entre la promoción de la seguridad y la construcción de paz tanto a corto y medio plazo, como el desarrollo social y económico a largo plazo” (CIDDR, 2009, p. 16). Además, la segunda generación de DDR asumió una coordinación más sistemática con los procedimientos de justicia transicional (Muggah y O’Donnell, 2015; Waldorf, 2013). En palabras de Mac Ginty (2010), el DDR empezó a incluirse en la reconstrucción del posconflicto, lo que implicó tanto la transformación de la vida de las víctimas como las nuevas garantías sociales, políticas y económicas de los excombatientes.

Frente a esto, el DDR tiene dos grandes retos. En primer lugar, contribuir a la seguridad humana de las sociedades en situación de posconflicto y, en segundo lugar, ofrecer oportunidades socioeconómicas a los excombatientes para facilitar su proceso de reintegración (Naciones Unidas, 2006). Más que proteger los intereses del Estado nacional, en este caso la seguridad humana

hace hincapié en la necesidad de proteger a los individuos de las amenazas que puedan afectar su dignidad (Jolly y Ray, 2006). O como lo sostiene Gasper (2007): “La seguridad humana ofrece una alianza de trabajo entre los discursos humanizados de los derechos, el desarrollo y las necesidades” (p. 9).

Bajo estas condiciones, los programas de DDR deben proporcionar a los combatientes la seguridad y la confianza necesarias para desvincularse de sus facciones y volver a la vida civil, contemplando siempre una vinculación más profunda con la dinámica política, histórica y cultural de los contextos (Berdal y Ucko, 2013). La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (2016) afirma que salvaguardar y mantener las comunidades en las que viven los excombatientes facilita el desarrollo de la capacidad nacional y, por tanto, la paz a largo plazo con seguridad y desarrollo. En consecuencia, los programas de reincorporación se convierten en los puntos de conexión entre el DDR y los planes nacionales de desarrollo, en los que de manera conjunta ambos contribuyen a la consolidación de la paz y la recuperación económica a corto y largo plazo (Buxton, 2008).

Mientras que el desarme y la desmovilización suelen estar relacionados con la seguridad y la estabilización, la reintegración se considera un proceso a largo plazo con una amplia participación de las comunidades como agentes de desarrollo (De Vries y Wiegink, 2011). Teniendo en cuenta este enfoque, el DDR aporta al proceso de desarme minimizando el costo del gasto militar y aumentando la inversión en desarrollo humano, lo que beneficia, por tanto, la estabilidad económica y social, así como el bienestar de los territorios (UNDP, 2013). En segundo lugar, tras el éxito del desarme y la desmovilización, se implementa un enfoque de desarrollo humano a largo plazo, en el que a los excombatientes se les ofrecían oportunidades en la vida civil diferentes a las que tuvieron durante el conflicto (UNDP, 2013). En este contexto, los procesos de reintegración buscaban restaurar el papel de los excombatientes en las sociedades con la accesibilidad a los derechos humanos y la mejora de las capacidades y los recursos humanos necesarios para lograr una paz con desarrollo (Casas y Guzmán, 2010).

Por último, la tercera generación parece poner de manifiesto la interacción entre los niveles macro y micro de la política tanto en su diseño como en la planificación y la implementación del DDR. Esta generación reconoce que, además de las dinámicas locales que se fusionan con el enfoque de DDR, las políticas macro de paz, las negociaciones dentro de la paz, el aparato político y militar, la construcción del Estado, la justicia y la reforma del sector de la seguridad interactúan constantemente con las operaciones de DDR (Muggah, 2014).

Para la tercera generación del DDR los acuerdos de paz tienen que hacer frente no solo a la radicalización y al extremismo violento, sino también deben enfrentar diversidad de actores armados no estatales y la permanencia de

actores terroristas, que promulgan formas híbridas de violencia entre países y trascienden ideologías nacionales (Munive y Stepputat, 2015; Piedmont, 2015)⁶. En este contexto, los programas de DDR actualmente son conscientes de que los actores criminales trabajan junto con los grupos armados rebeldes y en colaboración con ellos por medio de las fronteras (Cockayne y O’Neil, 2015). En la actualidad, los programas de DDR se enfrentan al reto de desvincular combatientes de estructuras armadas, quienes ven a sus grupos armados no solo como un medio político, sino también como una forma de subsistencia (por ejemplo, Al-Shabaab en Somalia) o como una forma de aumentar las ganancias criminales (por ejemplo, los miembros de las bandas criminales en Haití)⁷ (Cockayne y O’Neil, 2015).

La variedad de conflictos y actores armados ha hecho que la tercera generación de DDR se implemente en medio de conflictos en curso o con una disolución parcial de los grupos armados, como ha ocurrido en Afganistán y Colombia (tal es el caso del acuerdo de paz con las FARC-EP, en el que grupos guerrilleros como el ELN y otros grupos disidentes de los paramilitares aún están activos) (Piedmont, 2015). En la última revisión de los “Estándares integrales de desarme, desmovilización y reintegración”, se argumentó que “los acuerdos de paz a nivel nacional no siempre pondrán fin a los conflictos a nivel local. Las agendas locales —a nivel del individuo, la familia, el clan, el municipio, la comunidad, el distrito o el grupo étnico— pueden impulsar, al menos en parte, la continuación de la violencia” (Naciones Unidas, 2019c). Las dinámicas a nivel local y nacional demuestran que el conflicto transfronterizo/transnacional en algunos países incluye dinámicas económicas internacionales y regionales, así como intereses bélicos y políticos que apoyan y vinculan a redes criminales (Naciones Unidas, 2019a). Por lo tanto, en este marco el DDR se relaciona no solo con las operaciones de contrainsurgencia y antiterrorismo, sino también con los esfuerzos para reclutar milicias antinsurgentes (Cockayne y O’Neil, 2015).

En los últimos años el DDR se ha implementado en países con estructuras políticas estatales débiles, en los que la ausencia del Estado impide enfrentar conflictos en curso (Piedmont, 2015). Esto ha llevado a prestar más atención al papel de los excombatientes como líderes políticos o veteranos de guerra, dando

⁶ En los últimos años los excombatientes se han vinculado al mercado de la monetización por medio de las fronteras internacionales reintegrándose a los grupos armados como mercenarios. Este ha sido el caso de la República Democrática del Congo y la República Centroafricana (Piedmont, 2015).

⁷ Ahora, los recursos financieros de los actores armados no estatales proceden más de los mercados ilícitos y menos de la población civil, lo que aumenta los ataques a la población civil y, por tanto, el número de víctimas (Cockayne y O’Neil, 2015).

prioridad a sus aspiraciones políticas, así se fomenta la creación de partidos políticos (Piedmont, 2015). Esto requiere también acuerdos con grupos terroristas, quienes directamente influyen en las dinámicas jurídicas y políticas posteriores al conflicto y, por tanto, en la implementación de los programas de DDR.

La tercera generación del DDR exige una mayor flexibilidad frente a las necesidades de Estados débiles, especialmente en países en los que su fragilidad intensifica el nivel de conflicto. Ahora el DDR se enfrenta al reto de integrar las políticas de lucha contra el extremismo violento y el desmantelamiento terrorista (Cockayne y O’Neil, 2015).

Esta transición en los procesos de DDR ha llevado a la creación de programas educativos, sociales y productivos que responden a las necesidades e intereses de los excombatientes. Sin embargo, estos esfuerzos seguirán siendo insuficientes hasta que el DDR transforme su enfoque político y de seguridad en una perspectiva holística que vincule las expectativas de los excombatientes y víctimas en el marco social, económico y político, donde se planteen como aspectos centrales de la reintegración las necesidades y capacidades locales en el diseño e implementación de sus programas.

Desafíos del DDR

El principal desafío del DDR consiste en crear estrategias que faciliten la transición hacia la paz, no solo mejorando las condiciones sociales y económicas de los excombatientes, sino también garantizando el respeto por los principios de justicia y fomentando un desarrollo integral y sostenible. Para el logro de este objetivo, la percepción hacia los excombatientes debe redefinirse. Los excombatientes siguen percibiendo más como una amenaza que hay que controlar en contextos de posconflicto y no como actores que pueden contribuir al desarrollo y la construcción de paz de un país (Bowd y Özerdem, 2013; Özerdem, 2012). Esta percepción ha llevado a que gran parte de los procesos de reintegración social se haga de manera “aislada”, lo que excluye en la práctica la articulación con proyectos de desarrollo que se relacionen con dinámicas políticas, históricas y culturales tras el conflicto (Berdal y Ucko, 2013; Buxton, 2008).

Estudios de hace más de una década muestran que no hay pruebas suficientes sobre cómo contribuyen los programas de DDR a los procesos de consolidación de la paz (Muggah, 2010), ni tampoco pruebas empíricas sobre si tiene un impacto en el restablecimiento de la paz (Cockayne y O’Neil, 2015). Por ejemplo, en el 2009, la Escola de Cultura de Pau de Barcelona, España, afirmó en su anuario de DDR que “ningún proceso de DDR de los últimos años había dado resultados óptimos” (Caramés Boada y Sanz Pascual, 2009, p. 10).

Una de las razones para desestimar las contribuciones del DDR en la construcción de paz es la falta de claridad sobre sus objetivos y la dinámica operativa para alcanzar sus metas. El marco ambiguo en el que se enuncian los indicadores y resultados del DDR presenta resultados confusos y una contribución insuficiente al marco más amplio de la consolidación de la paz (Stankovic y Torjesen, 2010). Un ejemplo son las estrategias utilizadas para lograr una reintegración social y económica exitosa, que usualmente no están alineadas con las necesidades e intereses de los excombatientes y las comunidades receptoras⁸ (Bowd y Özerdem, 2013; McMullin, 2013a).

Así mismo, es confuso cómo se determina el éxito del DDR. Por lo general, los resultados a corto plazo solo se definen por el número de excombatientes desmovilizados, la entrega de armas y municiones, o el número de excombatientes pertenecientes a programas de reintegración. Sin embargo, no se mide el éxito de los programas de DDR en comparación con otras intervenciones de construcciones de paz lideradas por el Estado (Stankovic y Torjesen, 2010). No existe ninguna medida práctica que sustituya o funcione junto al DDR tradicional y que abarque el enfoque de desarrollo integral (Naciones Unidas, 2010).

Además, la falta de claridad sobre los alcances del DDR y las limitaciones de la consolidación de la paz han llevado a un malentendido sobre el papel de los Gobiernos y los actores internacionales en las intervenciones de este. En la actualidad, los programas de DDR se están convirtiendo en una acción gubernamental que identifica a las personas excombatientes como

el objeto clave de la regulación [que] se nutre de un cuerpo de expertos y autoridades (burócratas de las Naciones Unidas y miembros del Gobierno) que se encargan de las tareas de vigilancia y de supervisar el comportamiento de los “objetos” [los excombatientes] y, sobre todo, de producir conocimientos sobre estos “objetos” para alimentar estrategias eficaces de control, estabilización nacional y progreso individual. (Munive y Jakobsen, 2012, p. 377) [comillas añadidas]

Esta postura hace evidente una desconexión entre los supuestos internacionales, las prácticas locales y los procesos de DDR, así como una relación desigual entre Estados con altos niveles de fragilidad y actores internacionales con poder y ambiciones (De Vries y Wiegink, 2011; Munive y Jakobsen, 2012).

En este contexto, el DDR sigue basándose en los discursos hegemónicos de la paz liberal, al poner énfasis en sus discursos en la seguridad y el desarrollo

⁸ El término *comunidades receptoras* se refiere a las personas residentes de las regiones en las que los excombatientes deciden iniciar su reincorporación a la sociedad.

económico, por lo que deja de lado la integración de las dinámicas sociales, psicosociales y políticas que surgen en los territorios a los que regresan los excombatientes (Berdal y Ucko, 2013; Bowd y Özerdem, 2013; Özerdem, 2013). Por ejemplo, la apropiación local⁹ y el trabajo articulado con comunidades no se concibe como la principal estrategia en las operaciones de paz del DDR; en su lugar, la prioridad sigue estando en los principales donantes, que solo reconocen parcialmente las necesidades e intereses de los actores locales y sus gobiernos (Richmond y Mitchell, 2011).

La tercera generación del DDR ha hecho evidente la falta de claridad sobre el mantenimiento de la paz, pues sus proyectos se concentran solo en los grupos que integraron las operaciones militares y no en los grupos de poblaciones que interactuaron con ellos (Cockayne y O'Neil, 2015). Además, al implementar estrategias del DDR en contextos de operaciones militares y antiterroristas en curso dificulta la consecución de los objetivos de este, en lo que refiere a oportunidades de empleo, garantías de seguridad y participación política, lo que al final demuestra contribuciones marginales en la transformación del conflicto y la construcción de paz (Felbab-Brown, 2015).

Una de las alternativas para superar los retos del DDR es centrarse en un enfoque sensible al conflicto. La historia del conflicto, las condiciones socioeconómicas de los actores locales y las capacidades institucionales locales deberían desempeñar un papel fundamental en las políticas y programas de DDR. Bajo esta perspectiva, el DDR debe entender a las personas excombatientes como agentes activos en la reconstrucción del posconflicto y no como simples amenazas a la seguridad (Jennings, 2008).

En los siguientes apartados examinaré el desarrollo del DDR en Colombia, explorando el acuerdo de paz con las FARC-EP y el surgimiento y evolución del término *reincorporación colectiva*.

Antecedentes del DDR en Colombia

El primer acuerdo de paz en Colombia tuvo lugar en 1957, después de la violencia bipartidista entre conservadores y liberales en un periodo llamado La Violencia, que culminó con una coalición en la que se acordó la paridad en la división burocrática, la cual se denominó el Frente Nacional¹⁰ (CNMH, 2013; Koth, 2005). Tras este acuerdo, la presidencia de Belisario Betancur promulgó

⁹ La apropiación local se refiere al “grado de control que los actores locales ejercen sobre los procesos políticos nacionales” (Donais, 2012, p. 1).

¹⁰ El Frente Nacional tuvo lugar entre 1958 y 1974 (CNMH, 2013).

la Ley 35 de 1982^[11] con el fin de sentar las bases para nuevos procesos de desmovilización (Giraldo Gómez y Giraldo, 2010). Esta ley sirvió para establecer treguas con algunos grupos insurgentes de izquierda, pero desafortunadamente no resultó en un acuerdo exitoso entre todas las partes^[12].

Después, con la Ley 77 de 1989 se establecieron treguas con otros grupos guerrilleros^[13], principalmente con miembros del M-19^[14], quienes llevaron a cabo su proceso de desmovilización en 1990^[15] (CNMH, 2014; Giraldo Gómez y Giraldo, 2010; Villarraga, 2013). Posteriormente, se creó el Decreto 1385 de 1994 para dar amnistía y reincorporación de las FARC-EP, el ELN y otros grupos armados insurgentes de baja escala que se desmovilizaron individualmente y no formaron parte de ningún acuerdo de paz. Las desmovilizaciones individuales buscaban debilitar las estructuras de las guerrillas otorgando beneficios económicos a los excombatientes dependiendo de su colaboración con la justicia y la fuerza pública (CNMH, 2014; Villarraga, 2013).

En el 2003, se estableció una política de reincorporación bajo el Decreto 200, la cual era una modificación del antiguo Decreto 1385 de 1994^[16], dentro de la Política de Seguridad Democrática^[17] establecida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (Giraldo Gómez y Giraldo, 2010). La administración de Uribe

¹¹ Con esta ley más de 2000 excombatientes fueron beneficiados por la amnistía (CNMH, 2013).

¹² Durante la década de los ochenta, combatientes del ELN formaron parte del proceso de desmovilización del M-19, paralelo a las negociaciones de paz con las FARC-EP bajo la presidencia de Andrés Pastrana Arango. Durante estas negociaciones se firmó un cese al fuego entre las FARC-EP y el Gobierno, que se denominó “Acuerdos de La Uribe, municipio de Meta”. El resultado de este proceso llevó a la creación del partido político Unión Patriótica, que no prosperó debido al gran número de asesinatos de sus miembros (alrededor de 3000) a manos de grupos paramilitares, lo que afectó al éxito de las negociaciones de paz (Koth, 2005).

¹³ Como el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento 19 de abril (M-19) y diferentes milicias locales de Medellín (CNMH, 2017).

¹⁴ Este proceso de desmovilización fue establecido en la Ley 77 de 1989, que constituyó el marco jurídico del acuerdo de paz durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas con el grupo guerrillero M-19. Después, esta ley fue aplicada durante la presidencia de César Gaviria en el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Popular, y con otros grupos como la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y milicias locales (Giraldo Gómez y Giraldo, 2010).

¹⁵ El programa de desmovilización comprendía tres fases: normalización, rehabilitación y reconciliación (Plazas Niño, 2006).

¹⁶ Este decreto pretendía resolver las necesidades inmediatas de los excombatientes que se desmovilizaban individualmente, pero sin ofrecer un paquete completo de medidas de reincorporación (Giraldo Gómez y Giraldo, 2010).

¹⁷ La política de seguridad democrática pretendía mejorar la seguridad adoptando un enfoque multifacético, con el fin de hacer frente a su incapacidad histórica para ejercer la autoridad en su territorio. Para responder a esta situación, el Gobierno aumentó el tamaño de las fuerzas armadas

argumentaba que “un Estado más fuerte con mayor presencia territorial también conduciría a una mayor seguridad para el pueblo colombiano” (Derks *et al.*, 2011, p. 12). A partir de su mandato, las desmovilizaciones individuales aumentaron drásticamente (2002-2010)¹⁸, lo que provocó el debilitamiento de la estructura guerrillera por la deserción de combatientes de los grupos insurgentes (Derks *et al.*, 2011).

Entre el 2002 y 2005, se produjo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia¹⁹. Un total de 31700^[20] paramilitares recibió garantías dentro de la Ley de Justicia y Paz²¹ a cambio de decir la verdad y devolver a las víctimas los bienes que se les habían despojado (Derks *et al.*, 2011). Sin embargo, este proceso de paz con los grupos paramilitares recibió grandes críticas. Una de estas fue la falta de un marco jurídico claro que protegiera los derechos de las víctimas afectadas por estos grupos (Cabrales Salazar, 2012; González Chavarría, 2010). También se criticó masivamente la impunidad otorgada a los paramilitares, especialmente a aquellos que habían cometido masacres y violaciones de derechos humanos (véanse, por ejemplo, las denuncias interpuestas por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2006, citado en Inter-American Court of Human Rights, 2010). Las desapariciones extrajudiciales y lo que coloquialmente se denominó “falsos positivos”²², el incumplimiento de las condiciones previas a un proceso de desmovilización y las supuestas falsas desmovilizaciones de excombatientes²³ fueron otros

y creó una red de informadores que se extendía por todo el país y que servían de informantes para el Ejército (Koth, 2005).

18 54 163 miembros de grupos armados se desmovilizaron durante la presidencia de Uribe (2002-2010) (ARN, 2019).

19 El Gobierno creó la Ley de Justicia y Paz 975 del 2007, que permitía procesar y condenar a miembros de grupos armados ilegales que se hubieran beneficiado de procesos de desmovilización. Esta ley reveló un aparente fracaso en cuanto al compromiso de los paramilitares con la reparación de las víctimas (CNMH, 2017).

20 El número de paramilitares registrados en el acuerdo de paz fue muy polémico. Tras la desmovilización paramilitar, solo 1200 excombatientes fueron reconocidos como parte del proceso de paz, pero este número se duplicó cuando se empezaron a dar incentivos económicos (Mejía, 2008).

21 Investigaciones han manifestado que, durante la presidencia de Uribe, muchos políticos de su coalición, asesores cercanos y funcionarios públicos se vincularon en alianzas con paramilitares y narcotraficantes para establecer instituciones estatales (Carranza-Franco, 2014).

22 Los “falsos positivos” se refieren a la desaparición forzada de jóvenes socialmente marginados que fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional. Después, fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, como estrategia de las fuerzas militares para obtener grados militares y beneficios (CNMH, 2013).

23 Al principio, el número estimado de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia oscilaba entre 11 000 y 20 000 personas. Sin embargo, en realidad fueron más de 30 000. Este número incluía a simpatizantes y colaboradores, como proveedores, conductores e informantes, y

factores que afectaron la consistencia del proceso de DDR con los paramilitares (Koth, 2005).

El número masivo de desmovilizaciones durante la presidencia de Uribe llevó a la creación del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil en el 2006. Este programa contribuía a aportar a las necesidades básicas de los excombatientes en términos de educación, atención sanitaria y proyectos de generación de ingresos tanto para los desertores de las FARC-EP como para los paramilitares desmovilizados. Sin embargo, este programa no cumplió con las condiciones de un paquete completo de DDR, sino que fue entendido como deserción con beneficios (Fattal, 2019).

El alto número de desmovilizaciones de miembros de las FARC-EP respondió a una estrategia de mercadeo liderada por el Gobierno, que buscaba manipular a los miembros de la guerrilla utilizando el amor como una forma de incentivar su deserción. Este enfoque se fortaleció aún más durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018) y sirvió como una forma de implementar estrategias militares a la medida para obtener acceso al conocimiento y la información de los desertores de las FARC-EP (Fattal, 2018). La intensa presión militar y la neutralización de esta guerrilla durante el mandato de Uribe condujeron al declive de su estructura militar, lo que desencadenó una sensación de inestabilidad dentro de sus tropas (Zambrano Quintero, 2019).

El gran número de desmovilizaciones entre el 2002 y 2007 no tuvo efectos positivos en la transición hacia la paz. Estos procesos de desmovilización llevaron a la proliferación de bandas criminales (CNMH, 2017; Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010). Estos grupos se basaban en estructuras comandadas por grupos paramilitares, que se distinguían por estar a la vanguardia de las economías ilícitas y la violencia contra la población civil (Derks *et al.*, 2011). La violencia asociada a estos grupos incluyó desplazamientos forzados (particularmente en las regiones costeras de Córdoba y Nariño), masacres y homicidios selectivos (Derks *et al.*, 2011). Además, la aparición de las bandas criminales aumentó el número de asesinatos de excombatientes, que entre el 2003 y el 2006 ascendió a 2830, lo que representa el 5 % del total de desmovilizados (ARN, 2020c).

también a la comunidad en general (CNMH, 2017; Derks *et al.*, 2011). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007) asegura que el aumento del número de excombatientes desmovilizados tenía como objetivo proteger legalmente a los narcotraficantes o como un medio para garantizar más subsidios hacia estos grupos por parte del Gobierno. Tal fue el caso de la “desmovilización” del grupo Nutibara en el 2003, que reclutó jóvenes en Medellín con el único propósito de inscribirlos en el proceso de desmovilización.

Entre el 2002 y 2009, el número de excombatientes superó las capacidades operativas de las políticas de reintegración²⁴, lo que llevó al Gobierno colombiano a aumentar la estructura de la política y a adaptar la dinámica interna y operativa del programa. En el 2013, la Alta Consejería para la Reintegración se convirtió en la Agencia Colombiana para la Reintegración mediante el Decreto 4138 del 2011. El objetivo de esta agencia fue garantizar la continuidad y el mejoramiento de la política de reintegración mediante el fortalecimiento de la autonomía administrativa, financiera, presupuestal y la estructura organizacional de esta entidad (ARN, 2018b).

Para ese entonces, la política de reintegración había sido adaptada a una perspectiva de desarrollo y de largo término, pasando de un enfoque de reinserción²⁵ a uno de reintegración. Esto implicaba una ruta de reintegración que otorgaba beneficios en términos de apoyo psicosocial, educativo, económico y proyectos de generación de ingresos a los excombatientes en su transición a la vida civil (Gobierno de Colombia y ARN, 2018). Para el 2012, la política de reintegración colombiana se adaptó a los estándares internacionales del DDR siguiendo las normas de amnistía, los tratados humanitarios y los principios fundamentales de los derechos humanos. Esta política se aplicó de manera autónoma y sin la intervención o control de ningún actor externo²⁶ (Prieto, 2012). Una de las particularidades del DDR en Colombia fue el fortalecimiento de los vínculos sociales de las personas excombatientes con la comunidad receptora mediante actividades que promovían las relaciones sociales y las competencias educativas, con lo que se buscaba mejorar las dificultades socioeconómicas y la falta de capital social de este grupo poblacional (Carranza-Franco, 2016).

Durante la presidencia de Juan Manuel Santos se continuaron implementando procesos de deserción y desmovilización, así mismo se redujeron las fuerzas armadas de la guerrilla²⁷, lo que propició un nuevo intento por establecer nuevos acercamientos entre las partes (Ríos, 2015). Entre el 2012 y 2016,

24 La mayoría de los excombatientes se encontraba en Bogotá y Medellín, las dos ciudades más grandes de Colombia.

25 La reinserción era una asistencia a corto plazo, en la que las personas regresaban a su ciudad y a sus comunidades de origen y recibían asistencia humanitaria y apoyo para su reincorporación a la vida civil (Lozano, 2005).

26 Los principales aspectos que distinguen el DDR en Colombia de otros procesos de este tipo en el mundo son la parcialidad, la diversidad de actores y formas de conflicto, el desarrollo en medio de una resistencia beligerante, los diferentes contextos regionales, un proceso de DDR en medio de la existencia parcial de la paz, los esfuerzos en términos presupuestales y el apoyo parcial de la cooperación internacional (Nussio, 2010; Villarraga, 2013).

27 Se produjo una reducción significativa del número de efectivos de las FARC-EP, que pasaron de 17 000 combatientes en el 2000 a 8000 en el 2010 (Ríos, 2015).

el Gobierno colombiano inició los diálogos de paz con las FARC-EP, que concluyeron con el “Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado el 24 de noviembre del 2016^[28]. Como parte de este acuerdo, la Agencia Colombiana para la Reintegración se convirtió en la Agencia para Reincorporación y Normalización (ARN) mediante el Decreto 897 del 2017^[29]. Desde entonces, esta entidad ha sido la encargada de liderar el proceso de reincorporación³⁰ de más de 13 000 firmantes de paz. Este proceso inicia con una fase de alistamiento y transición hacia la reincorporación, la cual se comienza de manera formal cuando se aprueba en agosto del 2018 la política de reincorporación bajo el CONPES 3931 del 2018. A continuación, describo la evolución de las FARC-EP y el acuerdo final con el Gobierno que puso fin a un conflicto de más de cincuenta años en Colombia.

Surgimiento y evolución de las FARC-EP

Las FARC-EP iniciaron su militancia guerrillera en Colombia en 1964, tras la lucha agraria de los años treinta y el periodo denominado La Violencia de los años cincuenta (CNMH, 2014). Las FARC-EP eran una organización revolucionaria político-militar que luchaba por los derechos de los oprimidos de un sistema capitalista, que sufrían la exclusión socioeconómica y la falta de espacios para ejercer la libertad política de las personas. Las personas de las FARC-EP apoyaron su lucha diciendo: “Desde la Conquista, la historia de Colombia se ha distinguido por la violencia de los opresores y la resistencia de los oprimidos” (FARC-EP, 2019, p. 1).

La guerrilla surgió tras el asesinato del político socialista Jorge Eliécer Gaitán en 1948, durante el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores. Este periodo desencadenó la lucha masiva de movimientos sociales, sindicatos y simpatizantes liberales, que dio lugar a la creación de aproximadamente 36 frentes guerrilleros basándose en una perspectiva liberal. El primer enfrentamiento entre guerrilleros y militares ocurrió en 1964 en la operación Marquetalia (FARC-EP, 2019). Aquellos que sobrevivieron a este enfrentamiento

28 El actual acuerdo de paz fue modificado tras la derrota de un plebiscito celebrado en octubre del 2016 que puso en manos de los colombianos la decisión de aprobar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

29 Este decreto buscaba diseñar, implementar, coordinar y evaluar la política, los planes, los programas y los proyectos inmersos en la reintegración de los firmantes de paz, según el acuerdo final firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre del 2016.

30 A partir del acuerdo de paz firmado en el 2016 con las FARC-EP, la reintegración pasa a llamarse *reincorporación*.

decidieron planear una estrategia para organizarse militarmente y crear un movimiento guerrillero. La primera reunión guerrillera se llamó El Bloque Sur e involucró a 48 campesinos que tenían ideologías comunistas y liberales comunes, quienes fueron los que sentaron las bases de las primeras directrices operativas de las FARC-EP (CNMH, 2014). En el Décimo Congreso del Partido Comunista ellos aprobaron normas disciplinarias y estrategias militares para su operación como guerrilla, que culminó con la creación formal de las FARC-EP en enero de 1966 (CNMH, 2014).

Entre 1965 y 1973, tras el surgimiento de las FARC-EP, comenzaron a aparecer nuevas guerrillas revolucionarias como el Ejército de Liberación Popular, el ELN, el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Movimiento de Autodefensas Obreras y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Todos ellos tenían ideologías socioeconómicas y políticas similares, sin embargo, utilizaban estrategias operativas y militares diferentes (FARC-EP, 2019). Se puede decir que el periodo entre 1958 y 1982 marcó una transición en Colombia que pasó del bipartidismo a la violencia subversiva (CNMH, 2013).

La perspectiva ideológica de las FARC-EP estuvo influenciada por la Revolución cubana, la confrontación de China y la Unión Soviética, y principalmente por los modelos marxistas que marcaban las estrategias para promulgar una revolución. En 1974, Manuel Marulanda, uno de los guerrilleros fundadores de las FARC-EP, argumentó su lealtad a los principios leninistas-marxistas en su lucha contra un sistema que agobiaba la realidad colombiana, lo que a la postre moldeó los principios ideológicos de las FARC-EP (CNMH, 2014). Esta guerrilla también se inspiró en el pensamiento revolucionario del libertador Simón Bolívar, quien basó sus discursos en el antímpperialismo, la unidad latinoamericana, la igualdad y el bienestar de los pueblos (FARC-EP, 2007). Esto se alineaba con su interés de proteger los derechos de los campesinos y los más vulnerables (CNMH, 2014).

Desde 1965, se expandieron por toda Colombia, utilizando la organización de las masas con acciones estratégicas en el territorio, lo que les permitió ganar movilidad y reconocimiento en el país (Daly, 2016b). Estas estrategias militares aumentaron el número de simpatizantes rurales, quienes ayudaron a las FARC-EP (voluntariamente o por miedo) a proteger a los miembros de la guerrilla de los opositores o proporcionando los recursos necesarios como refugio, alimentos o animales³¹.

Durante los diez primeros años de conflicto, las FARC-EP no lograron el reconocimiento y las alianzas que esperaban. Las tensiones con el partido político comunista, la escasez de recursos y la falta de reconocimiento a nivel

³¹ Información recolectada en mi trabajo de campo en Colombia entre el 2018 y 2019.

nacional redujeron su actividad militar y su presencia activa en las movilizaciones campesinas. Sin embargo, a partir de 1974, comenzaron a expandirse drásticamente por el territorio colombiano. En ese entonces, contaban con cuatro frentes y estaban a punto de crear el quinto y sexto frente en Antioquia y Valle del Cauca y Cauca, respectivamente (CNMH, 2014). Para 1976 ya tenían veinte frentes, 1000 combatientes y 120 comandantes. A partir de entonces decidieron perfeccionar su estrategia política y organizativa abriendo un partido político clandestino, que se convirtió en la cabeza política de esta guerrilla.

Paralelamente, las FARC-EP empezaron a acelerar el reclutamiento de nuevos combatientes creando alianzas con otros grupos guerrilleros, como el ELN (Las Conferencias, 2012). Durante este periodo, pasaron de ser una guerrilla rural a una guerrilla nacional en Colombia (CNMH, 2014). En 1982, en la Séptima Conferencia Guerrillera, las FARC comenzaron a conocerse como las FARC-EP al añadirle la palabra “Ejército del Pueblo” (FARC-EP, 2019).

En 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur, suscribieron el Acuerdo de La Uribe con un alto el fuego³². Sin embargo, este acuerdo de paz fracasó en 1987 debido a la violación de acuerdos por ambas partes (CNMH, 2014). Mientras tanto, como parte del acuerdo de paz, en 1985, las FARC-EP cofundaron un partido político llamado Unión Patriótica. Sin embargo, este partido no duró mucho a causa del alto número de asesinatos que tuvieron que vivir sus miembros. En 1988, entre 200 y 500 dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados. Cifras que se incrementaron entre 1988 y 1992 con el asesinato de entre 4000 y 6000 de sus miembros³³ (Patriotic Union, 2014). Tras este genocidio político, se intensificaron las ofensivas de las FARC-EP contra el Ejército colombiano (CNMH, 2013 y 2014). Durante este periodo, el apoyo que este grupo guerrillero recibía de las comunidades disminuyó drásticamente debido a la aparición de grupos paramilitares que amenazaban a la población rural que ayudaba a los grupos guerrilleros. Además, la caída del muro de Berlín y la crisis por la que atravesaba el comunismo provocaron una transformación en la estructura de operaciones de las FARC-EP³⁴.

En los años noventa, como estrategia de financiación, las FARC-EP comenzaron a involucrarse en el negocio de las drogas ilícitas, el intercambio con bandas

³² Jacobo Arenas (s. f.) sostiene que este proceso de paz se inició el 30 de enero de 1983 con la firma de una declaración conjunta entre el presidente de la Comisión de Paz y el Secretariado de las FARC-EP en los primeros meses del Gobierno de Belisario Betancur.

³³ A este periodo se le llamó “la guerra sucia”, que llevó al exterminio de los movimientos políticos alternativos. Además, estuvo en manos de partidos políticos tradicionales que tenían nexos con estructuras paramilitares y de narcotráfico (Ávila, 2019).

³⁴ Las FARC-EP contaron con el apoyo económico y operativo de los países socialistas (CNMH, 2014).

criminales y el clientelismo como forma de obtener dinero de las administraciones gubernamentales locales (CNMH, 2014). Ávila (2019) sostiene que la guerrilla tenía una base social con los cultivadores de cocaína (cocaleros), colonos pobres y campesinos en general, y en algunas ciudades, los sectores marginales radicales de izquierda. Las FARC-EP pasaron de controlar la producción de droga en algunos territorios a dedicarse plenamente al tráfico, lo que sirvió de estrategia para potenciar su capacidad militar (Cook, 2011). En estas condiciones, comenzaron a involucrarse más profundamente con las mafias en las fronteras colombianas, incluyendo la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, conocidos como “vacunas”³⁵ o “impuestos de guerra” (The Criminal, 2019). Esta transición hizo evidente que pasaron de ser un “grupo guerrillero tradicional a una insurgencia en todo el sentido de la palabra” (Cook, 2011, p. 19).

Los cambios en la financiación de las FARC-EP no afectaron al funcionamiento de esta guerrilla, pero sí dieron lugar a una estructura más jerarquizada con nuevas formas de organización (CNMH, 2014). Por ejemplo, aumentaron el número de milicias en las poblaciones cercanas a donde operaban como estrategia para controlar su mercado financiero de drogas y extorsión³⁶. Para entonces las FARC-EP operaban bajo la estructura de un estado mayor, compuesto por cinco miembros principales y cuatro suplentes. Estos miembros se reunían cada tres meses para planificar sus operaciones militares y políticas. Con base en lo acordado en las conferencias nacionales de guerrilleros, celebradas diez veces entre 1966 y el 2016 se sentaron las bases de sus discursos guerrilleros y su forma de operar. En estas conferencias, las FARC-EP sostenían que utilizaban una democracia revolucionaria y proletaria, en la que discutían los actuales problemas sociales, políticos y económicos que afectaban a la sociedad colombiana. Sobre esta base, planificaban su estrategia militar y operativa regida por sus reglamentos y estatutos, y por los lineamientos del plan estratégico aprobado en las conferencias (FARC-EP, 2019).

La organización de los miembros de las FARC-EP se basaba en estrategias cooperativas y colectivas. Cada camarada seguía diferentes roles que se distribuían e intercambiaban entre ellos según los requerimientos del comandante. Entre los roles estaban el *ranchar* (los que se encargaban de la comida), la *guardia* (compuesta por diferentes cargos y niveles de protección), el *economista* (personas que se encargaban de la distribución y el control de las provisiones de comida) y *comunicadores y radistas* (personas que se encargaban de la radio portátil y de la emisora de las FARC-EP). Algunos podían abandonar

35 Las FARC-EP cobraban este “impuesto de guerra” a grandes empresas, ganaderos, comerciantes, mineros, narcotraficantes y hasta transportistas de cerveza (Las conferencias, 2016).

36 Información obtenida durante mi trabajo de campo entre el 2018 y 2019.

temporalmente los campamentos para llevar a cabo exploraciones, actividades sociales o extorsiones, mientras que otros se encargaban de las minas antipersona, los depósitos de armas y la exploración de bombas. Al mismo tiempo, todos ellos fueron entrenados en estrategias militares y competencias ideológicas³⁷.

La expansión y el poder militar que las FARC-EP adquirieron durante las décadas de los ochenta y noventa llevaron al Gobierno de Andrés Pastrana Arango a intentar un acuerdo de paz con el grupo guerrillero, que fracasó tras cuatro años de negociaciones. Este proceso tuvo lugar entre 1998 y el 2002 en una zona de distensión de 42 000 km² controlada por las FARC-EP y la policía cívica, conocida como “El proceso de paz del Caguán” (CNMH, 2014). Este proceso estuvo lleno de improvisaciones e inconsistencias gubernamentales en la forma de operar de las estructuras militares, violaciones de derechos, presiones de autoridades administrativas, fracaso en la sustitución de cultivos ilícitos y repetidas suspensiones del proceso, lo que se tradujo en escaso apoyo de organizaciones políticas internacionales y nacionales (Villarraga y Castellanos, 2008). Debido a estas inconsistencias, este proceso se desvaneció por el incumplimiento de ambas partes, y llegó a su fin en el 2002 sin mayores contribuciones a la paz en Colombia (Ávila, 2019; Koth, 2005). Esto produjo aún mayores violaciones a los derechos humanos. La peor consecuencia del fallido proceso de paz fue la distracción mediática y social producida durante este periodo. Mientras las FARC-EP y el Gobierno se concentraban en la zona desmilitarizada, los grupos paramilitares se expandían por Colombia cometiendo un gran número de masacres, asesinatos, amenazas y desplazamientos (Ávila, 2019).

Tras el fracaso de este acuerdo de paz, los enfrentamientos militares aumentaron drásticamente. Las FARC-EP respondieron con ataques de armamento pesado y movilización de tropas, creando estructuras móviles que sumaron una nueva estrategia a sus ofensivas militares (Ávila, 2019). Estas acciones incrementaron su presencia en diferentes territorios de Colombia, creando regiones en las que el Estado no tenía el control y se sumían en la imposición de normas y reglamentos que la guerrilla tenía hacia los habitantes de estas regiones (CNMH, 2014).

Entre 1991 y el 2008, las FARC-EP aumentaron su expansión territorial y el número de combatientes, por lo que llegaron a 18 000 en el 2007. Sin embargo, este número se redujo después con la estrategia contrainsurgente establecida por la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y el Plan Patriota³⁸, que

37 *Ibid.*

38 Esta fue una estrategia militar propuesta por el Gobierno de Colombia con el apoyo de Estados Unidos para aniquilar a los grupos guerrilleros. Consistía en una “operación profunda” que pretendía atacar a los grupos guerrilleros dentro de los lugares en los que operaban o vivían

duró hasta el 2015 (CNMH, 2014). A pesar de los esfuerzos de Uribe por derrotar a las FARC-EP durante su mandato, las ofensivas de estas contra las fuerzas militares y la población civil aumentaron en un intento por resistir contra los esfuerzos contrainsurgentes del Gobierno de Uribe. Según Ávila (2019) entre 1995 y el 2005 se produjeron 1000 masacres tanto de grupos paramilitares como de guerrilleros. Cerca del 60 % del total de víctimas en Colombia corresponde a esta década.

La seguridad democrática y la estrategia contrainsurgente liderada por las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos desestabilizaron operativamente a las FARC-EP, produciendo una redistribución de la organización guerrillera en algunos territorios y su expulsión de algunas regiones del centro de Colombia (Ávila, 2019). Una de las principales ofensivas de estos Gobiernos fue el asesinato de tres de los líderes más representativos de esta guerrilla: Manuel Marulanda y Raúl Reyes en el 2008, y Alfonso Cano en el 2011 (FARC-EP, 2019).

En el 2012, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se iniciaron los diálogos de paz con las FARC-EP en La Habana, Cuba (Herbolzheimer, 2016). Durante cuatro años de negociación, miembros del Gobierno y de las FARC-EP, y representantes de mujeres, víctimas y comunidades indígenas mantuvieron reuniones para desarrollar una agenda que permitiera alcanzar un acuerdo final, lanzado en noviembre del 2016. En el periodo de negociación, ambas partes enfrentaron discrepancias relacionadas con los puntos incluidos en el acuerdo de paz, en lo que refiere a las normas jurídicas que lo amparaban, los beneficios políticos de esta guerrilla y las amnistías para los excombatientes (Reyes, 2013). Sin embargo, la confidencialidad de los diálogos, el desescalamiento del número de homicidios cometidos por las FARC-EP y una clara voluntad política de ambas partes por encontrar una solución que beneficiara el proceso de paz permitieron continuarlo (Planta, 2017).

Desde entonces, la situación cambió drásticamente debido al cese al fuego unilateral y a los evidentes avances en el acuerdo de paz (Ávila, 2019). En noviembre del 2016, los negociadores anunciaron un acuerdo final para poner fin al conflicto, tras superar diversos obstáculos, como la resistencia de algunos partidos políticos al acuerdo y su rechazo por más del 50 % de los votantes en el referéndum por la paz (Basset, 2018).

Nueve años después de la firma del acuerdo, Colombia ha mostrado notables logros en materia de paz³⁹, pero también una diversidad de conflictos

(Ávila, 2019). El Plan Patriota fue una continuación del Plan Colombia iniciado durante la administración Pastrana en 1999.

³⁹ A noviembre del 2023, el 32 % de las disposiciones expuestas en el acuerdo completó su implementación, el 19 % estaba en un nivel intermedio, el 39 % en un nivel mínimo y el 10% aún no había iniciado su implementación (Álvarez *et al.*, 2024).

emergentes e intereses políticos contrapuestos que han afectado el éxito de su implementación⁴⁰. A continuación, describo en detalle el punto 3 del acuerdo de paz, que establece el fin del conflicto y las particularidades del proceso de reincorporación de los firmantes de paz.

El fin del conflicto y los retos en el proceso de reincorporación

Según Herbolzheimer, el último acuerdo de paz en Colombia fue innovador en lo que tiene que ver con “posicionar los derechos de las víctimas en el centro de las conversaciones; abordar el problema estructural del desarrollo rural; crear una subcomisión de género; y planear la implementación mucho antes del acuerdo” (2016, p. 1). Echavarría *et al.* (2022) aseguran que el acuerdo de paz de Colombia es el más completo e integrado de los 34 acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos treinta años.

Desde el inicio, este proceso de paz se enmarcó en seis aspectos centrales: (1) desarrollo rural; (2) participación política; (3) cultivos ilícitos; (4) acuerdo sobre las víctimas del conflicto⁴¹; (5) terminación del conflicto, y (6) un tema procedural que tiene que ver con la implementación del eventual acuerdo de paz. Para dar sustento a este libro, en esta sección explicaré en detalle el punto 3 del acuerdo de paz: “Fin del conflicto” (Presidencia de la República, 2016).

Dicho punto dispuso la terminación de las acciones ofensivas entre las fuerzas militares y este grupo guerrillero (mediante la eliminación de las hostilidades), especialmente las cometidas contra la sociedad civil. Las partes acordaron el “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” y la “dejación de las armas” de los firmantes de paz (Presidencia de la República, 2016, p. 51). Estos procesos comprendieron un procedimiento técnico, transparente y verificable en el proceso de dejación de armas llevado a cabo por las Naciones Unidas⁴² seguido de la preparación de la reincorporación económica, social y política de los combatientes de las FARC-EP a la vida civil (ARN, 2018a).

⁴⁰ Esta información se obtuvo de informes y evaluaciones que han supervisado el acuerdo de paz, principalmente el Instituto Kroc, la misión de verificación de las Naciones Unidas y el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo.

⁴¹ Los puntos más complejos del acuerdo fueron los que involucraban a las víctimas y la justicia. Estas conversaciones duraron quince meses y tuvieron una fuerte presión de la opinión pública, que rechazaba la impunidad de los crímenes cometidos tanto por el Gobierno como por las FARC-EP (Herbolzheimer, 2016).

⁴² Este proceso se denominó D+180 y definió el tiempo que tuvo el Gobierno junto con las Naciones Unidas para el monitoreo, recolección y destrucción de las armas de las FARC-EP (Presidencia de la República, 2016).

El Gobierno colombiano comisionó en el 2017 a la Universidad Nacional de Colombia para llevar a cabo un censo que permitiera identificar las principales particularidades de los firmantes de paz y así obtener información para diseñar la nueva política de reincorporación⁴³. Según este censo, a julio del 2017, había 8185^[44] excombatientes en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), 34 estaban en los lugares transitorios de acogida⁴⁵, 1614 en los recintos penitenciarios carcelarios⁴⁶ y 182 en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación⁴⁷, para un total de 10 015^[48] excombatientes. El 77 % de los firmantes de paz eran hombres y el 23 % mujeres; el 66 % procedían de zonas rurales, el 19 % de zonas urbanas y el 15 % de zonas urbano-rurales. El 18 % eran indígenas y el 12 % afro. En términos de educación, solo el 21 % había terminado la educación secundaria y el 57 % la básica primaria (Universidad Nacional de Colombia, 2017).

Para iniciar la reincorporación de los firmantes de paz, el Gobierno colombiano creó 20 ZVTN y 6 puntos transitorios de normalización. Estas zonas estaban ubicadas en 14 departamentos y 26 municipios del país. En un principio, las ZVTN y los puntos transitorios de normalización fueron los lugares elegidos para garantizar el

43 El Consejo Nacional de Reincorporación fue el encargado de diseñar la nueva política de reincorporación. Este consejo está integrado por dos miembros del Gobierno y dos firmantes de paz. Su función era crear el programa de reincorporación y supervisar el proceso de reincorporación bajo el mandato del gobierno de Colombia.

44 La OACP informó que solo 6804 personas del total de la población en proceso de reincorporación llegaron a la ZVTN y PTN (OACP, 2017 párrafo 1).

45 Los lugares transitorios de acogida eran lugares especialmente destinados a niñas y niños menores de 18 años que formaban parte de las FARC-EP. Allí ellos recibían un tratamiento adicional en su reincorporación a la sociedad por ser contemplados como víctimas del conflicto. “Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al 31 de diciembre de 2017 solo 135 niños se habían desvinculado de las FARC-EP (75 niñas y 60 niños). El Alto Comisionado para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta” (Naciones Unidas, 2018, p. 6).

46 “Los miembros de las FARC-EP que, en virtud de la Ley de Amnistía, hayan sido beneficiados con la excarcelación, se integrarán, si así lo desean, a estas zonas para continuar con el proceso de reincorporación a la vida civil” (Presidencia de la República, 2016, p. 63). Para el 2020, aún había 185 personas privadas de la libertad, a pesar de estar acreditadas como firmantes de paz (Rueda, 2020).

47 El Mecanismo de Monitoreo y Verificación fue una estructura técnica tripartita compuesta por representantes del Gobierno nacional (fuerzas armadas del Estado colombiano, que incluyeron tanto a las fuerzas militares como a la Policía Nacional), las FARC-EP y organizaciones internacionales (Presidencia de la República, 2016).

48 El número que se estimó de combatientes en el 2012 que podían formar parte del proceso de paz era entre 8000 y 10 000 (Nussio y Howe, 2012).

acuerdo de cese al fuego y los preparativos para la reincorporación económica, política y social de las unidades de las FARC-EP a la vida civil de acuerdo con los intereses de los excombatientes, según lo establecido en el numeral 3, inciso 2, del Acuerdo General y su tránsito a la legalidad. (Presidencia de la República, 2016, p. 62)

En agosto del 2017, las ZVTN se convirtieron en espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación (ETCR). Los ETCR sirvieron para capacitar a los firmantes de paz en su reincorporación a la vida civil, elaborando proyectos productivos y atendiendo las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas en un modelo de reincorporación comunitaria basado en los decretos 1274 del 2017 y 2026 del 2017 (Presidencia de la República, 2017).

Desde el 2017, los ETCR han sido designados para que los firmantes de paz y sus familias vivan y reciban nivelación educativa y capacitación laboral, al tiempo que se fortalece el diseño de proyectos de generación de ingresos (figura 2) (ARN, 2017).

En septiembre del 2017, la Defensoría del Pueblo reportó que solo 5 ETCR estaban completamente construidos y 6 se encontraban en condiciones precarias, lo que afectó la cobertura de las necesidades básicas de los firmantes de paz. Además, no existía un enfoque diferencial para cubrir las necesidades de mujeres, adultos mayores, niños y personas con discapacidad (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017; Instituto Kroc, 2017). Para enfrentar estas dificultades, en



Figura 2. Trayectoria de los AETCR y NAR

Fuente: elaboración propia.

marzo del 2018, el Gobierno envió 263 profesionales de la ARN a 26 ETCR para realizar articulación institucional y ayudar en la implementación de programas de desarrollo (Pares, 2018).

También, los lugares en los que estaban ubicados los AETCR no facilitaron el proceso de reincorporación. La selección de zonas apartadas de los cascos municipales dificultó el desarrollo de emprendimientos productivos, pues la ausencia de carreteras y servicios esenciales como agua y electricidad no contribuían al desarrollo económico (Segura y Stein, 2018). Además, las estructuras de los AETCR y su ubicación impidieron que los firmantes de paz se favorecieran de oportunidades sociales, políticas y económicas ofrecidas por la región de acogida. Esto hizo, entonces, más complejo este proceso, pues como lo enuncia Pouligny (2005) los excombatientes usualmente regresan a “un espacio comunitario parcialmente ‘reinventado’” (p. 499), que durante el conflicto fue completamente modificado, reprimido y violentado. Se ha comprobado que este proceso de reincorporación ha sido más difícil en aquellos territorios en los que no hubo una adecuada “pedagogía de paz”⁴⁹ con las comunidades receptoras, quienes en el momento de la llegada de los firmantes de paz se resistieron frente al proceso de reincorporación en sus territorios (véase, por ejemplo, el caso del Cauca).

En los primeros veinticuatro meses de reincorporación, los excombatientes recibieron un ingreso básico mensual equivalente al 90 % del salario mínimo mensual legal vigente. Además, recibieron un subsidio único de normalización de dos millones de pesos colombianos al inicio de su proceso de reincorporación (Presidencia de la República, 2016). El Gobierno argumentó que después de dos años de reincorporación, los excombatientes podrían lograr un enfoque integral y sostenible con capacidad para auto-sostenerte (ONU: 55 % de miembros, 2017).

Como parte de la reincorporación económica, los firmantes de paz crearon las Economías Sociales del Común (ECOMUN), que sirvieron de plataforma para integrar diferentes iniciativas económicas colectivas. Hasta el 2018, más de 4900 de ellos formaban parte de estas iniciativas. Además de identificar a ECOMUN⁵⁰ como una alternativa productiva, los firmantes de paz querían

⁴⁹ “La pedagogía de la paz” es una estrategia creada dentro del acuerdo de paz, que pretendía desarrollar y divulgar contenidos educativos que promovieran el conocimiento de la política de paz, legalidad y convivencia y el contenido de los acuerdos de paz con los grupos armados ilegales mediante el uso de estrategias pedagógicas, culturales, participativas y comunicativas (Adarve *et al.*, 2018).

⁵⁰ ECOMUN ha reunido 135 asociaciones, con 3509 hombres y 1412 mujeres registrados (Rueda, 2020).

contribuir a la reducción de la desigualdad, la pobreza y los efectos ambientales negativos (ECOMUN, 2018; Presidencia de la República, 2016).

Las iniciativas económicas recibieron del Gobierno un “capital semilla” de ocho millones de pesos colombianos por exintegrante de las FARC-EP, que podían utilizarse para desarrollar proyectos individuales y colectivos de generación de ingresos⁵¹ (Presidencia de la República, 2016). Hasta el 2019 se aprobaron 38 iniciativas colectivas en las que participaron 2290 firmantes de paz y se establecieron 360 proyectos individuales que beneficiaron a 410 individuos (Rueda, 2020).

La falta de oportunidades para los firmantes de paz los llevó a buscar otras alternativas económicas (Rueda, 2020). En noviembre del 2017, un representante de las Naciones Unidas Colombia afirmó que más del 55%⁵² de los miembros de las FARC-EP ya habían abandonado los ETCR, debido a su interés en reencontrarse con sus familias, involucrarse en política o realizar su proceso de reincorporación por cuenta propia. Sin embargo, una de las razones más importantes fue la pérdida de confianza hacia las garantías ofrecidas a los espacios territoriales⁵³ (ONU: 55 % de miembros, 2017).

Para el Instituto Kroc, el abandono de los AETCR por parte de los firmantes de paz afectó la implementación de los programas de reincorporación, ya que dificultó el contacto con ellos y el seguimiento a sus procesos de reincorporación. Además, estar desvinculados de la estructura colectiva de las ex-FARC-EP aumentó los riesgos de reincidencia, la violación de sus derechos, la desconfianza hacia el Gobierno y la falta de participación de todos los miembros de la sociedad en las acciones de reconciliación y no repetición (Kroc, 2017). Sin embargo, Joshua Mitroti, director de la ARN para ese entonces, mencionó que desde agosto del 2017 los firmantes de paz cumplieron con las condiciones para su proceso de reincorporación y recibieron los documentos que los habilitaban como ciudadanos, lo que significaba su libertad de trasladarse desde los ETCR a cualquier otro lugar de su conveniencia y continuar allí con su proceso de reincorporación individual (Bolaños, 2017).

⁵¹ El PNUD, la Embajada de Suecia, el colectivo de las FARC, la OACP y el Servicio Nacional de Aprendizaje Profesional de Colombia crearon en los 26 ETCR una estrategia para la autosostenibilidad, que consistía en el apoyo a iniciativas de autoconsumo y otras necesidades básicas.

⁵² A diciembre del 2024 solo 1759 firmantes de paz vivían en los ETCR (CONPES para reincorporación, 2018).

⁵³ La Fundación Paz y Reconciliación (Pares, 2018) hizo evidente que la falta de articulación de las diferentes entidades gubernamentales, la falta de voluntad para garantizar tierras a los excombatientes, la ausencia de un programa diferente para los excombatientes, las falencias en lo político y en las amnistías, y el aumento de los homicidios en las zonas en las que vivían los excombatientes son algunas de las razones para que ellos desconfíen del Gobierno y tomen la decisión de abandonar los ETCR y las NAR.

Para el 2018, el Gobierno había eliminado dos ETCR, uno en Vigía del Fuerte, Antioquia, y otro en Tierralta, Córdoba, mediante el Decreto 982 del 2018. El ministro del Interior argumentó: “En estos dos espacios el proceso de reincorporación fue exitoso y los excombatientes ya están reincorporados. Por lo tanto, no hay razones para mantener abiertos estos ETCR” (Rivera *et al.*, 2018). Sin embargo, los firmantes de paz sostuvieron que el Gobierno los había cerrado porque solo unas pocas personas permanecían en ellos. La mayoría de ellos había abandonado los ETCR debido al incumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno⁵⁴. Un año después, se cerró también el ETCR en Santa Lucía Ituango, Antioquia, por problemas de seguridad.

Además, en el 2019, se habían identificado 73 NAR en toda Colombia⁵⁵, en las que 1832 excombatientes continuaban implementando su proceso de reincorporación colectiva, pero sin el mismo apoyo económico y de seguridad que los AETCR recibían del Gobierno⁵⁶ (véase el mapa 1) (Rueda, 2020). Con el Decreto 1048 del 14 de agosto del 2024 se crea el marco normativo para el reconocimiento formal de las áreas especiales de reincorporación colectiva, antes conocidas como AETCR (Presidencia de la República, 2024). Al 2024, 1757 firmantes de paz se encontraban en estas áreas y 10 144 estaban fuera de estos espacios en 430 municipios de Colombia (ARN, 2024).

Las condiciones de seguridad han sido uno de los aspectos más críticos del proceso de reincorporación. Desde la firma del acuerdo final de paz, al menos 1600 líderes sociales y 420 firmantes de paz han sido asesinados (IDEPAZ, 2025): la mayoría de los AETCR está rodeada por grupos disidentes paramilitares o las llamadas “bandas criminales”⁵⁷. De los AETCR 10 se encuentran en zonas de alto riesgo de seguridad, 4 en zonas de riesgo medio de seguridad y 12 están en menor riesgo de problemas de seguridad⁵⁸ (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017). Tras el acuerdo de paz, grupos disidentes y desertores de las FARC-EP y antiguos grupos paramilitares tomaron el control de los territorios en los que operaba esta guerrilla. La aparición de nuevos grupos

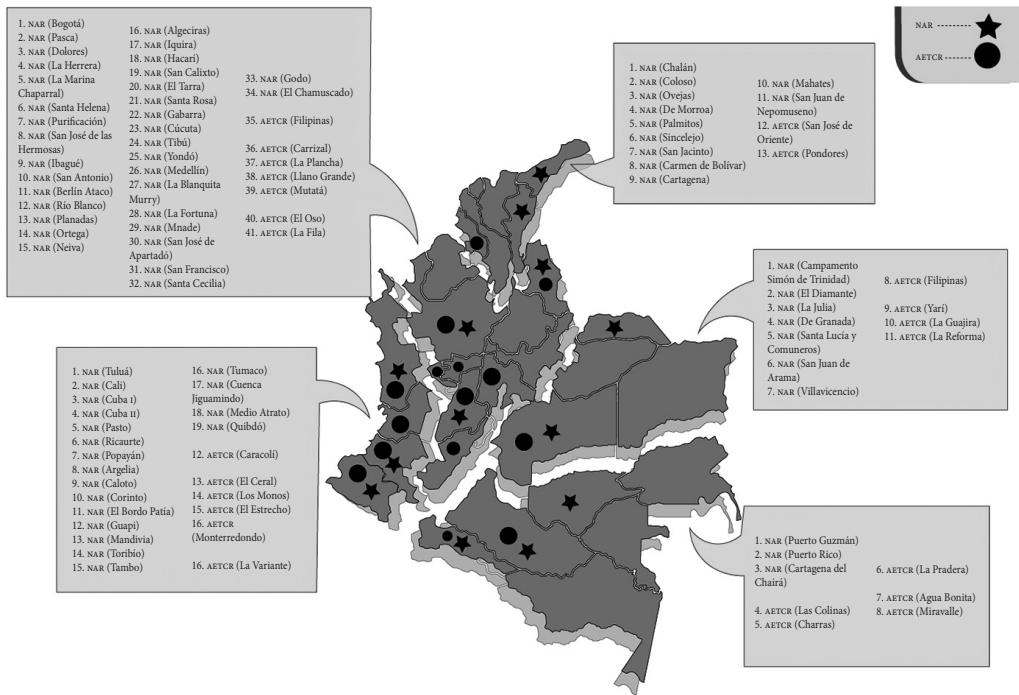
54 De acuerdo con la información suministrada por exintegrantes de estos AETCR que ahora viven en el ETCR Llano Grande y San José de León (trabajo de campo, octubre-diciembre del 2018).

55 61 NAR se encuentran en zonas rurales y 12 en zonas urbanas (Rueda, 2020).

56 Las NAR no reciben los beneficios que se ofrecen a los AETCR, como la protección militar que brinda el Gobierno ni las remesas mensuales.

57 Segundo la Defensoría del Pueblo de Colombia (2017), en el 2017 había 11 ETCR que se encontraban con la presencia del grupo guerrillero ELN, 11 con presencia de grupos armados organizados, 18 con presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y 7 con presencia de disidencias de las FARC-EP. De los espacios territoriales 20 tenían minería ilegal y 8 cultivos ilícitos.

58 El estudio de seguridad de los ETCR está distribuido en tres niveles de acuerdo con 40 criterios establecidos por el Gobierno colombiano, entre ellos están el riesgo, la demografía, la geografía y el acceso.



Mapa 1. Ubicación de los AETCR y NAR

Fuente: elaboración propia.

criminales condujo al reacomodo del poder territorial, lo que ha resultado en un aumento de la confrontación entre grupos armados, y por ende, en el aumento del número de víctimas (Fajardo-Heyward, 2018).

Para el 2020, 28 grupos formaban parte de las disidencias de las FARC-EP (Ávila, 2020b). Entre 500 y 1000 excombatientes de esta guerrilla se habían unido a diferentes grupos insurgentes en Colombia. La mayoría de los disidentes ha sido de las Guerrillas Unidas de Sur o Frente Oliver Sinisterra con alrededor de 450 a 500 disidentes, y el frente 7, liderado por Miguel Botache Santillana, con 400 a 450 disidentes (Fundación Ideas para la Paz, 2018). Según Pares (2018), estos grupos de disidentes y desertores⁵⁹ revelan intenciones criminales sin ninguna ideología política. Existen tres grupos que conforman la disidencia de las FARC-EP: la estructura de Gentil Duarte e Iván Mordisco, que se autodenominan

59 Los disidentes son los que no formaron parte del acuerdo de paz y los desertores son los que decidieron abandonar las ZVTN, ahora llamadas AETCR, en los que se están llevando a cabo los procesos de reincorporación.

las verdaderas FARC-EP; la Segunda Marquetalia, que inició siendo liderada por Iván Márquez y Jesús Santrich; y las estructuras dispersas, que están desarticuladas y trabajan con organizaciones criminales⁶⁰ (Ávila, 2020a).

Las condiciones de seguridad, el surgimiento de nuevos grupos armados y la incertidumbre jurídica sobre la permanencia de los AETCR han desestabilizado los programas económicos, políticos y sociales de los firmantes de paz, y por tanto, su reincorporación colectiva. A continuación, describo las particularidades de la política de reincorporación impulsada en el 2018 a partir de un acuerdo entre el Gobierno y los firmantes de paz. Esta política intenta dar cumplimiento a los compromisos institucionales en materia de reincorporación como parte del acuerdo de paz para los ocho años posteriores a su firma.

Política nacional para la reincorporación social y económica de los firmantes de paz

El 22 de junio del 2018, el Gobierno y los firmantes de paz aprobaron la nueva política nacional para la reincorporación social y económica, la cual fue establecida en el CONPES 3931 del 2018. Esta política buscaba garantizar la reincorporación integral de los excombatientes y sus familias a la vida civil de acuerdo con sus intereses y necesidades, contemplando la experiencia de décadas que la ahora llamada ARN ha tenido en la implementación de procesos similares (Gobierno de Colombia y ARN, 2018). Principalmente esta política buscaba apoyar la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación. Con la promoción de proyectos productivos, se buscaba involucrar no solo a los firmantes de paz, sino también a comunidades que se encontraban alrededor de estas poblaciones (Valencia Agudelo, 2019). Así mismo, al crear la Unidad Técnica de Reincorporación bajo el Decreto 897 del 2017, se crea un equipo técnico dedicado exclusivamente al proceso de reincorporación, que tenía como objetivo abarcar una postura fuera del esquema tradicional de reintegración basado en el modelo de DDR.

Una de las particularidades de la nueva política de reincorporación era la perspectiva colectiva, que implica la agrupación de los firmantes de paz en diferentes territorios de Colombia, el desarrollo de proyectos colectivos de generación de ingresos y un enfoque comunitario sólido (Presidencia

⁶⁰ Teniendo en cuenta el gran número de disidentes y desertores de los grupos armados, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 965 del 2020 para establecer medidas de sometimiento individual a la justicia a los miembros de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados e incentivos económicos para el retorno a la legalidad (Presidencia de la República, 2018).

de la República, 2018). La política de reincorporación tiene cuatro objetivos principales: fortalecer la articulación entre las entidades que trabajan en la reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, promover espacios de reconciliación dentro de las comunidades, facilitar el acceso a oportunidades económicas para los firmantes de paz y sus familias y garantizar que ellos tengan acceso a educación, servicios de salud y seguridad social (Pedraza, 2018). Estos objetivos se enfocaban en la reincorporación colectiva y participativa entre el Gobierno y los firmantes de paz, con considerable énfasis en un enfoque territorial, de género, de derechos y étnico. Además de resaltar un vasto compromiso en materia de reparación y reconciliación para las víctimas (Presidencia de la República, 2018). Según lo establecido en el punto 3.2 del acuerdo de paz:

El proceso de reincorporación será un proceso integral, sostenible, de carácter excepcional y transitorio que tendrá en cuenta los intereses de la comunidad de las FARC-EP, sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en todos los territorios del país, así como a la convivencia y reconciliación entre los habitantes; además, está orientado al desarrollo y despliegue de actividades socialmente productivas y a la democracia local. La reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de las libertades individuales y el libre ejercicio de los derechos individuales de todos aquellos que actualmente son miembros de las FARC-EP y se encuentran en proceso de reincorporación. (Presidencia de la República, 2016, pp. 68-69)

La política de reincorporación se basa en el enfoque de desarrollo humano propuesto por Amartya Sen, quien destaca las capacidades y funciones que las personas pueden ejercer tanto individual como colectivamente, para fortalecer sus condiciones sociales y económicas (Gobierno de Colombia y ARN, 2018). Este enfoque de capacidades constituye el marco teórico del desarrollo humano, en el que la libertad se considera el elemento central del desarrollo. A diferencia de la idea de que el bienestar humano se logrará mediante el aumento del producto nacional bruto, la industrialización, la tecnología, la modernización o el ingreso personal, este enfoque pone a las personas en el centro del desarrollo y considera los valores económicos un medio para ampliar las libertades que disfrutan los miembros de la sociedad (Gobierno de Colombia y ARN, 2018). En esencia, el desarrollo humano tiene que ver con la libertad para reconocer todo el potencial de cada vida humana y para perseguir y disfrutar de las elecciones libres de los individuos mediante el fomento de sus capacidades humanas (Sen, 2001).

Las capacidades humanas implican las iniciativas individuales de las personas para tener funciones sociales cuando participan en la vida de las comunidades y cuando tienen un papel activo en los acuerdos sociales y económicos (Sen, 2001). Este proceso implica el razonamiento público, en el que a partir de la libertad todos los miembros de la sociedad cumplen un papel activo en el desarrollo de sus libertades (Frediani, 2010).

En línea con lo anterior, el proceso de reincorporación tiene como objetivo promover las capacidades de los firmantes de paz mediante la mejora de su sentido de pertenencia a la sociedad. Este proceso implica una noción de colectividad que va más allá de la agrupación de individuos o la creación de un partido político. Incluye una identidad colectiva y la creación de grupos cohesionados que comparten experiencias comunes en torno a símbolos, causas, valores, objetivos e intereses (Gobierno de Colombia y ARN, 2018).

En este sentido, los proyectos económicos colectivos ayudan a los firmantes de paz a mantener su cohesión en tiempos de reincorporación. Como mencionan Segura y Stein (2018): “La dirigencia de las FARC-EP esperaba que se organizaran proyectos productivos en torno a las zonas de concentración y que les permitieran mantener su afiliación al proceso y la garantía en la continuidad de su organización, ahora como una fuerza política” (p. 22).

Como parte de la adecuación de la nueva política de reincorporación, el Gobierno colombiano creó el Consejo Nacional de Reincorporación, encargado de diseñar junto con los miembros del Gobierno la política de reincorporación. Este proceso planteó un enfoque participativo que reunía a miembros del Gobierno, representantes de las ex-FARC-EP, víctimas y fuerzas militares. Asimismo, creó los Consejos Territoriales para la Reincorporación con el propósito de reunir a los actores públicos y privados a nivel nacional y territorial, y desarrollar actividades en beneficio de los procesos de paz y reconciliación mediante acciones a largo plazo (véase la figura 3).

Para alcanzar estos objetivos, se creó el Sistema Nacional de Reincorporación, con el fin de fortalecer la planeación y articulación para la reincorporación de los excombatientes y sus familias. Además, este sistema delegó a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI)⁶¹ como la entidad que haría seguimiento y aseguraría la política pactada en el acuerdo de paz (véase la figura 3) (Presidencia de la República, 2018).

61 El principal objetivo de la CSIVI es resolver diferencias entre las partes, dar seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento, promover y dar seguimiento a la implementación legislativa del acuerdo, dar seguimiento a los informes de implementación; y recibir insumos de los órganos encargados de la implementación (Presidencia de la República, 2016).

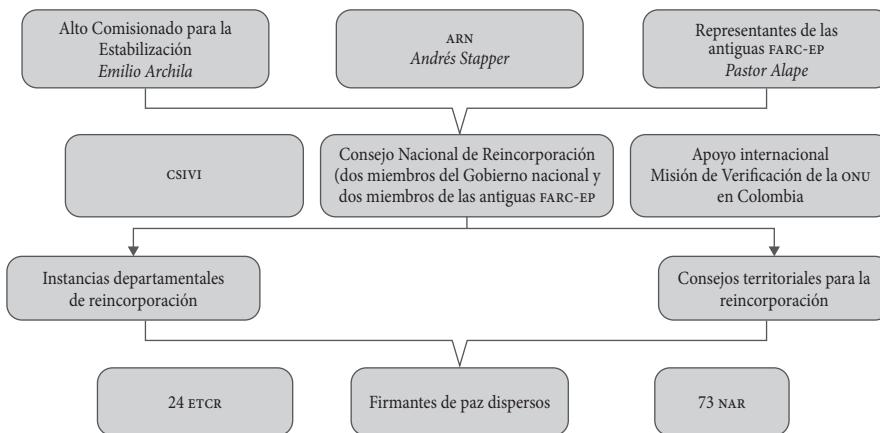


Figura 3. Estructura organizativa del proceso de reincorporación

Fuente: elaboración propia.

En el 2025, la ARN funciona con una unidad técnica de reincorporación, que se encarga directamente del proceso de reincorporación de los firmantes de paz que formaron parte del acuerdo de paz en el 2017. Esta unidad se articula con el director general y un grupo asesor. Esta dirección general se conecta con la dirección programática de reintegración, la cual se encarga de procesos previos al 2017 y nuevos que no forman parte del acuerdo de paz, así mismo una secretaría general. Actualmente la ARN opera siguiendo los lineamientos estipulados en el Programa de Reincorporación Integral, el cual fue creado con el artículo 3 del Decreto 897 del 2017, pero solo en el 2023 se reglamentó mediante el artículo 2 del Decreto 846 del 2024 (Resolución 2319, 2024).

La Resolución 2319 del 2024 define los requisitos de ingreso al programa, así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de reincorporación integral tanto individuales como colectivos. También establece los planes de reincorporación territoriales, las líneas estratégicas y transversales del programa, los criterios de acceso a beneficios económicos, los mecanismos de monitoreo y evaluación, las restricciones a los beneficios y los criterios para la finalización del programa (Resolución 2319, 2024).

El enfoque territorial y comunitario es el aspecto central en la implementación de la política de reincorporación, en este se reconocen las particularidades económicas, sociales y culturales de los territorios, así como sus necesidades y capacidades. Este enfoque valora la participación activa de las víctimas y los firmantes de paz en la transformación del conflicto, desarrollando proyectos más incluyentes que han integrado no solo a los firmantes de paz, sino también a sus familias, comunidades aledañas y víctimas (Resolución 2319, 2024).

Con ello, la política pone énfasis en las diferentes necesidades de mujeres y hombres y en sus derechos incluyentes y enfoques étnicos durante el proceso de reincorporación (Presidencia de la República, 2018).

En cuanto a la reparación de las víctimas, la política de reincorporación ha buscado fortalecer la participación de los firmantes de paz y las comunidades aledañas en la construcción de paz, la reconciliación, el desarrollo comunitario y la exigibilidad de derechos⁶². Este proceso ha buscado promover una ciudadanía autónoma en la que el fortalecimiento de las redes sociales facilite capacidades de afrontamiento que beneficien el proceso de reincorporación (Gobierno de Colombia y ARN, 2018). Además, se ha tenido en cuenta la estructura, cohesión e identidad colectiva de las antiguas FARC-EP como punto de partida para configurar una perspectiva de reincorporación que se adecue a su legado, con el fin de minimizar la dispersión y atomización típica de los excombatientes en los procesos de DDR.

Bajo esta perspectiva, implementar un proceso de reincorporación plantea numerosos retos, especialmente en un contexto en el que el conflicto sigue activo. El surgimiento de nuevos grupos insurgentes, las disidencias de las FARC-EP y la presencia del ELN en algunos territorios de Colombia hacen que la reincorporación de los firmantes de paz sea no solo un reto para ellos, sino también para el Gobierno colombiano. El término *sociedades afectadas por el conflicto* o *sociedades posconflicto* exemplifica un periodo posterior a un conflicto, pero con la permanencia de diferentes formas de violencia que ejemplifican nuevas formas de conflicto, pero ahora con otros significados.

El proceso de reincorporación ha pasado por numerosos cambios desde que el expresidente Iván Duque Márquez asumió el cargo en el 2018 y luego con la elección del actual presidente Gustavo Petro. La adaptación del acuerdo de paz dentro del discurso de “paz con legalidad” y la falta de articulación institucional afectaron la aplicabilidad de las narrativas establecidas en el acuerdo (Martínez y Lefebvre, 2019; Rueda, 2020). En ese entonces, la implementación del acuerdo de paz se centró en eventos, pero no en acciones de largo plazo, lo que debilitó los acuerdos en el proceso y, por ende, la sostenibilidad de la reincorporación colectiva (ARN, 2024). Desde el 2022, con la elección del presidente Gustavo Petro y su Ley de Paz Total se han buscado reactivar los acuerdos con disidencias de las FARC-EP y el ELN. Así mismo, con la Resolución 2319

62 Como parte del proceso de reconciliación y reparación, los firmantes de paz han estado trabajando en la reconstrucción de infraestructuras, la limpieza y el desminado humanitario, participando en programas de sustitución de cultivos ilícitos y en proyectos de desarrollo rural. También, ellos están contribuyendo a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas asesinadas o desaparecidas durante el conflicto, y apoyando programas de reforestación y otros proyectos ambientales (Presidencia de Colombia, 2016).

del 2024, se ha creado el Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Reincorporación Integral, que busca acelerar el tránsito a la vida civil de los firmantes de paz; así mismo, se ha instalado formalmente el Sistema Nacional de Reincorporación y el apoyo de subcomités de apoyo técnico (Resolución 2319, 2024).

A pesar de los esfuerzos del gobierno de turno, la larga duración del conflicto ha producido grandes rupturas en el tejido social y en la confianza hacia el Gobierno por parte principalmente de las comunidades rurales, las víctimas y los firmantes de paz. La falta de oferta institucional y de cohesión de las entidades en los territorios ha afectado las garantías socioeconómicas a poblaciones más afectadas por el conflicto, presentando obstáculos en el éxito del proceso de paz. Así mismo, los beneficios adquiridos por los firmantes de paz en el proceso de reincorporación han desencadenado otros problemas en los territorios, como una mayor estigmatización, problemas de convivencia local y una incomprensión de la justicia transicional (Gobierno de Colombia y ARN, 2018).

Una vez expuesto el caso colombiano, la evolución de los procesos de reincorporación y su dimensión actual, el siguiente capítulo aborda las principales discusiones en torno a la reincorporación, analizando tanto sus significados como sus prácticas.